Área de Transcripciones

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
14.ª SESIÓN ORDINARIA
(Matinal)

MARTES, 11 DE ENERO DE 2022
PRESIDENCIA DE LA SEÑORA PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS

—A las 09:41 h, se inicia la sesión.

La señora PRESIDENTA.— Siendo las 9 y 41 horas, del día martes 11 de enero, procederemos a pasar la asistencia a efectos de verificar el *quorum* reglamentario, para dar inicio a la décima cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase tomar nota de la asistencia, y señalar si algún congresista hubiera presentado licencia.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista:

Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Procedo a pasar lista de asistencia.

Congresista Echaíz de Núñez (); congresista Tudela Gutiérrez.

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Aguinaga Recuenco (); congresista Aragón Carreño (); congresista Bellido Ugarte (); congresista Cavero Alva.

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Cutipa Ccama (); congresista Elías Ávalos (); congresista Jeri Oré (); congresista Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Quito Sarmiento.

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Reymundo Mercado.

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios (); congresista Ventura Angel () .

Señora presidenta, están presentes ocho señores congresistas. El *quorum* para la presente sesión es de 11 señores congresistas. Ningún congresista hasta el momento ha presentado licencia.

No habiendo el *quorum* reglamentario, podríamos dar inicio a la sesión de manera informativa.

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. Muchas gracias.

Vamos a esperar que los señores congresistas se conecten.

Vamos a pasar a la estación Despacho.

DESPACHO

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, a sus correos institucionales y por el aplicativo Teams se les ha enviado los reportes de los documentos emitidos y recibidos del día 3 al 9 de enero del presente año, así como también se les ha remitido los tratados internacionales ejecutivos y decretos de urgencia ingresados en este periodo.

En este periodo del año 2022 no han ingresado proyectos de ley a la Comisión de Constitución. Si algún congresista tuviera interés en algunos de estos documentos, sírvase solicitarlo a la secretaria técnica.

No tenemos en esta oportunidad ningún Acta que aprobar. En consecuencia, vamos a pasar esta sección y vamos a la sección Informes.

Informes

La señora PRESIDENTA.— Quisiera informarles a los señores congresistas que el día de ayer hemos recibido una comunicación muy importante, es la copia del Oficio 010-2022-P/JNE, por el cual este organismo presenta su opinión sobre la autógrafa de ley que establece el proceso de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.

En el acuerdo del Pleno del Jurado se señala que con relación al artículo 40 de la Ley 26300 su modificación que consiste en señalar de manera expresa que no es posible que proceda una iniciativa de referéndum sobre una reforma constitucional si es que no se cumple con el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución, que si bien dicha modificación resulta para ellos

innecesaria, su inclusión no contraviene la norma fundamental, es decir, no contraviene la Constitución Política del Perú.

Con relación al artículo 44, advierte un proceso de referéndum que no es un proceso de calendario fijo y que el Jurado Nacional de Elecciones debe evaluar diversos aspectos técnicos como los plazos para la realización de las actividades previo al acto electoral, entre otros; y propone que se realice una adecuación de este artículo 44 en el sentido de que se establezca que la convocatoria a referéndum en caso de reformas constitucionales solo procede en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política, y luego de que el Congreso de la República comunique al Jurado Nacional de Elecciones su decisión de someter una reforma constitucional a referéndum.

Teniendo en cuenta que durante el debate y aprobación de esta ley algunos congresistas, pese a las explicaciones realizadas por diversos constitucionalistas, replicadas incluso en el Pleno del Congreso, mantenían algunas dudas respecto a la inconstitucionalidad de la propuesta y la creencia de que se estaba recortando derechos ciudadanos.

Consideramos en la Comisión de Constitución que este documento debe ser entregado a cada uno de los miembros de esta comisión, por lo que solicito a la secretaría técnica que envíe por la plataforma Teams y por el chat de los congresistas este importante documento enviado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con lo que esperamos se pueda despejar cualquier rezago de duda sobre la constitucionalidad de la propuesta y se le destierre de manera definitiva la idea infundada de que esta comisión estaría proponiendo un recorte de derechos fundamentales.

Si algún congresista tuviera algo que informar, por favor, sírvanse pedir el uso de la palabra.

No habiendo ningún informe de algún congresista, vamos a pasar a la sección Pedidos.

Pedidos

La señora PRESIDENTA.— Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, por favor, sírvanse manifestarlo.

No habiendo ningún pedido, vamos a pasar a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

La señora PRESIDENTA.— Predictamen de control constitucional del Decreto de Urgencia 105-2021, por el que se establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos.

El Decreto de Urgencia 105-2021 que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el día 14 de noviembre de 2021, y puesto en conocimiento del Congreso el 16 de noviembre, es decir, luego de las 24 horas que por norma está obligado a informar el

Ejecutivo. Remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento fue derivado al grupo de trabajo encargado del control de actos normativos del presidente de la República, a cargo de la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, quien en su calidad de coordinadora remitió a esta comisión el informe sobre la constitucionalidad del referido decreto de urgencia, el que fue aprobado por unanimidad de sus integrantes.

Este decreto de urgencia que tiene por objeto dictar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos como mecanismo compensatorio que coadyuva a la reactivación económica ante los efectos de la pandemia de la Covid-19 dispone, entre otras:

Primero, la autorización de una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2021 hasta por la suma de 615 millones 249 mil 201 soles a favor del pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para financiar el pago del bono extraordinario único de 210 soles a favor de los trabajadores formales del sector privado.

Y segundo, la autorización de una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, hasta por la suma de 52 millones 551 mil 240 soles a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar el otorgamiento del bono extraordinario de 210 soles a favor del personal del sector público que percibe menores ingresos con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

El grupo de trabajo en su informe, aprobado por unanimidad, recomienda derogar este decreto de urgencia, entre otros, por los siguientes motivos:

Primero, la norma en estudio que autoriza la transferencia de partidas a fin de otorgar bonos extraordinarios a favor de los trabajadores formales con pocos ingresos del sector privado y público no ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 80 de la Constitución, el cual señala que los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto.

Segundo, tampoco se ha observado el principio de legalidad presupuestaria y de competencia; en tanto el Congreso de la República, de acuerdo con la Constitución en sus artículos 56, inciso 4); 77, 79, 80, 81 y 102 es el órgano constitucionalmente habilitado para aprobar la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, siendo la función presupuestaria del Congreso de la República indelegable.

Tercero, respecto a los requisitos formales que debió cumplir la norma que son: primero, refrendo ministerial; y segundo, dación en cuenta dentro de las 24 horas de publicada. Esta solo se cumplió con el primer requisito, no así con el segundo, ya que la norma

fue puesta el conocimiento del Congreso el día 16 de noviembre, es decir, dos días después de su publicación, incumpliendo el Poder Ejecutivo de esta manera con el plazo de 24 horas establecido en el literal a), del artículo 91 del Reglamento del Congreso.

Respecto a los requisitos sustanciales. El informe del grupo señala que:

No cumple con el criterio de excepcionalidad, en virtud de que, si bien es cierto, la pandemia del Covid-19 ha sido una situación imprevisible en el mes de marzo del 2020; para el día 14 de noviembre de 2021, fecha en que fue publicado el decreto de urgencia en cuestión ya se cuenta con más información y canales institucionales para atender la crisis sanitaria y reactivación económica.

No cumple con el criterio de necesidad, puesto que la ejecución de gasto contemplado en la norma pudo esperar el procedimiento parlamentario para ser aprobada en la vía ordinaria. Esto se acredita en virtud que después de 39 días de promulgado el decreto de urgencia, el 14 de noviembre de 2021, se publicó la Resolución Ministerial 263-2021-TR, del 23 de diciembre de 2021, 39 días después, a través de la cual se aprueba el padrón de trabajadores beneficiarios del bono extraordinario otorgado a favor de los trabajadores formales del sector privado con menores ingresos, aprobado por Decreto de Urgencia 105-2021.

No cumple con el criterio de generalidad e interés público, **(2)** por no contemplar al sector informal para ser beneficiario del bono, a pesar que de conformidad con cifras del INEI, la tasa anualizada de informalidad desde julio del 2020 a junio del 2021 a nivel nacional, fue del 78.1% sumados los ámbitos urbanos 72.5 y rural 95.9%.

Esto se traduce en 9.01 millones de trabajadores que han quedado desprotegidos y sin ningún bono.

No cumple con el principio de conexidad, en razón de que la problemática descrita por el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos, no es atendible de manera sostenible en el tiempo a través de un bono, sino a través de estrategias, que deben promover un trabajo digno y productivo, respetuoso de los derechos fundamentales, en un contexto de nueva normalidad. Esto último, no se alcanza con la norma examinada.

Esta comisión luego de analizar el informe del grupo de trabajo citado, así como aunar más sobre la materia, ratificando el contenido del informe, concluye que el Decreto de Urgencia 105-2021, no cumple con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 80, ni el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política del Perú, así como tampoco con los requisitos formales señalados en el artículo 91 del Reglamento del Congreso por los siguientes motivos:

Si bien es cierto regula una materia que impacta en la caja fiscal, tratándose de una materia económica y financiera, esta comisión encuentra que dicha norma contiene materia presupuestal, sujeta a

reserva de ley, y es que en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política, de las transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República, tal como la ley de Presupuesto.

No siendo posible la emisión de una norma con rango de ley, que contemple una aprobación de una transferencia de partidas.

Asimismo, la aprobación de la transferencia de partidas a través de Decreto de Urgencia 105-2021, vulnera de manera flagrante el principio de legalidad presupuestaria, reserva de ley y de equilibrio entre poderes del Estado.

Con la aprobación de este decreto de urgencia, el Poder Ejecutivo tendría tanto la facultad de presentación, aprobación y ejecución de una transferencia de partidas, dejando de lado de manera reiterada, al Congreso de la República, quien es el legitimado a intervenir en materia presupuestaria, por ser el órgano representativo de la nación, que vela por un correcto uso de los fondos públicos de todos los peruanos.

No cumple con el criterio de excepcionalidad, toda vez que si bien es cierto la pandemia ha sido una situación imprevista que afrontó el país para el mes de marzo del año 2020, para el 14 de noviembre del 2021, fecha en que fue emitido el decreto de urgencia examinado, ya se conocía que los efectos de la pandemia seguirían aun en el país, perdiendo el carácter de una situación extraordinaria e imprevisible que tuvo en el año 2020.

Y es que en buena cuenta, el Poder Ejecutivo tuvo que prever los gastos que se tenían que afrontar para la lucha contra la pandemia, durante la presentación, debate y aprobación de la Ley 31084, Ley de Presupuesto para el año 2021.

En adición a ello, es necesario citar lo mencionado en la página 14, del informe emitido por el grupo de trabajo, que indica que el Ministerio de Economía y Finanzas, marco macroeconómico multianual 2022-2025, de agosto del 2021, ha establecido que los lineamientos de política económica están vinculados con el objetivo de lograr en el corto plazo, la aceleración del proceso de vacunación masiva que es clave para la reactivación económica.

Dar impulso a la inversión pública y privada, y promover la generación de empleo de calidad, y en el mediano plazo están más orientadas a impulsar la competitividad, fomentar la diversificación productiva e innovación tecnológica.

En otras palabras, ya el Ministerio de Economía y Finanzas están tomando medidas para mejorar la economía peruana, porque han sido previsibles los efectos negativos de la pandemia en el mercado nacional.

No siendo, por lo tanto, y es insostenible sostener que sea una situación imprevisible, que necesite una legislación excepcional.

De igual forma, no cumple con el criterio de necesidad, de generalidad, ni conexidad, conforme a los fundamentos expuestos en el presente predictamen.

Por tales motivos, esta comisión recomienda la derogación del Decreto de Urgencia 105-2021, sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación de las transferencias de partidas contenidas en la norma derogada, a la fecha de la emisión de la presente ley.

Igualmente, recomienda exhortar al Poder Ejecutivo, a poner mayor celo en el cumplimiento de los plazos establecidos para la remisión de los decretos de urgencia que emite bajo responsabilidad.

Habiendo culminado la presentación, damos inicio al debate.

Le damos la bienvenida al congresista Cerrón, que se encuentra de manera presente.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Muchas gracias, presidenta, muy buenos días.

La señora PRESIDENTA.— Y vamos a pedir que la secretaria técnica, nos reporte si han ingresado un número de congresistas necesario para poder dar inicio al debate.

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Presidenta, buenos días, José Luis Elías. Encantado.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Elías, bienvenido, gracias.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta, buenos días, Aragón Carrero, presente.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón.

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Buenos días, presidenta, Alejandro Aguinaga, presente.

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Quisiera informar, señora presidenta, que efectivamente se ha registrado la asistencia de...

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta, buenos días, Guido Bellido, regístreme, por favor.

Gracias.

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Señora presidenta, quisiera informar que efectivamente han registrado su asistencia los congresistas Aguinaga Recuenco, Aragón Carreño, Bellido Ugarte, Echaíz de Núñez Izaga, Elías Avalos, Soto Palacios y Ventura Angel.

Y ha presentado licencia el congresista Balcázar Zelada.

Están presentes 15 señores congresistas, el *quorum* para la presente sesión es de 10 señores congresistas, con el *quorum* necesario, podríamos dar ya inicio a la sesión de manera normal.

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias.

Le damos la bienvenida a la vicepresidenta de la comisión, a la doctora Gladys Echaíz, a quien la vemos repuesta, la vemos en muy buenas condiciones.

Doctora Echaíz, es una gran noticia recibirla y que este usted presente en la comisión.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Señora presidenta, gracias a todos por el apoyo, durante el tiempo que estuve un poco delicada.

La señora PRESIDENTA.— Si, se le ve muy bien, congresista. Muy repuesta.

Vamos a dar inicio al debate.

Hemos presentado la sustentación del predictamen, recaído en el Decreto de Urgencia 105, y es un predictamen de control constitucional.

Los congresistas que deseen hacer uso de la palabra, por favor, sírvanse levantar la mano.

Congresista Cerrón, tiene la palabra.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Señora presidenta, gracias, señora vicepresidenta y distinguidos colegas, que esta mañana nos reúne.

Quisiera mencionar sobre los efectos que afectarían a la población, una eventual derogación de este decreto de urgencia.

La derogación del decreto de urgencia puede tener un efecto perjudicial, alrededor de doce millones de personas, al imposibilitar el otorgamiento de un bono extraordinario, a más del 80% de trabajadores del sector formal privado.

Privando así a más de tres millones de familias, de vulnerabilidad relativa alta, de una inyección de más de seis cientos millones, lo que impedirá que se contribuya a mitigar a la sociedad de un conjunto de efectos negativos, en curso de una pandemia severa, agudizada en esta actual tercera ola.

Respecto a los supuestos incumplimientos de los criterios de la generalidad interés público y conexidad.

De acuerdo al Tribunal Constitucional, el principio de generalidad, permite asegurar que los beneficios de la medida, no circunscriban sus efectos a intereses determinados específicos, sino que alcancen a toda la comunidad.

En el caso concreto del decreto de urgencia de lo señalado por el artículo 58 de la Constitución Política, en el sentido que el Estado oriente el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, entre otras.

En ese sentido, considerando los criterios de razonabilidad y de necesidad sobre la base de la evidencia previamente señalada, el interés general del decreto de urgencia, se fundamenta en la mitigación de la caída de los ingresos reales de los trabajadores formales en el contexto económico vigente.

Lo cual tiene implicancias para la sociedad en su conjunto, dada la interacción y efectos que tiene el sector formal, sobre la economía nacional.

Así, si bien el efecto directo del decreto de urgencia, sin inyectar liquidez en hogares con trabajadores formales menos favorecidos económicamente en el contexto de la pandemia, dada su magnitud interrelación del sector formal con la economía en su conjunto, más de tres millones de hogares de forma directa, lo que alcanza alrededor de doce millones de personas que realizan transacciones en la economía nacional.

El impacto de esta medida, es de naturaleza macroeconómica, y el efecto es general, ello en tanto que el decreto de urgencia contribuye a la adquisición de bases, bienes y servicios por la población, en contexto de emergencia sanitaria, lo que incrementa el consumo privado y genera un efecto multiplicador sobre la economía en su conjunto, con implicancias generales sobre empleo, ingresos y producción en la sociedad.

Así, el bono extraordinario, alcanza a un grupo importante de trabajadores, y sus hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica relativa, como consecuencia por el efecto multiplicador del gasto.

La medida permite dinamizar la economía a nivel nacional, beneficiando incluso a hogares que no son directamente beneficiarios, por lo que la norma cumple con la finalidad perseguida.

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que el decreto de urgencia se emitió en un contexto en que se han publicado también otras medidas de naturaleza complementaria, con similares características y fines, que se han enfocado en distinta población objetivo, por ejemplo el bono Yanapay.

Lo que contribuye a configurar una política pública de enfoque integral y con efectos generales de interés público.

Creemos que debemos asumir esto con responsabilidad.

Por lo tanto, pienso que este decreto de urgencia debe ser aprobada.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cerrón.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— La palabra, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Bellido, tiene la palabra.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muchas gracias, señora presidenta y estimados colegas congresistas. Un gran saludo.

Para empezar, en este debate sobre este decreto de urgencia, es importante no ajustar al procedimiento de aprobación de manera ordinaria, sino extraordinaria, por el momento que nos

encontramos, y en este mismo momento, el país está en una situación complicada.

Y esa situación complicada se expresa en varios temas que tienen que ver con temas sociales, incluso, son temas políticos y también el plano económico.

En el plano económico, después de haber visto, como a nivel mundial la economía, la producción se ha paralizado, y de la misma forma en nuestro país, hace extraordinarias, especiales, y eso está orientado, señora presidenta, a que podamos generar acciones concretas de inversión pública para reactivar la economía.

Porque al final está orientado hacia las personas más vulnerables, dinamiza la economía local, interna, y eso fortalece la reactivación económica.

Entonces, siendo así, señora presidenta, también estos decretos de urgencia han servido para varias cosas:

Uno, para atender en una situación complicada a todos nuestros hermanos a nivel nacional, proyectos que no solo se ha cubierto el tema de Yanapay, con el decreto de urgencia, sino también está vinculados a proyectos que muchas provincias, **(3)** distritos y regiones no han sido atendidas y para reactivar la economía en este momento, es importante que esos proyectos se hagan realidad.

Entonces, eso significa, por ejemplo, que me recuerdo muy bien, el proyecto por más de 30 años han estado persiguiendo y nunca se les ha atendido, por ejemplo, el proyecto que tienen los agricultores en la región de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas, su proyecto que es de gran envergadura de riego, Parco Chiquillay, entonces, los hermanos ya están encaminados y, como eso, hay una serie de proyectos que en este momento ya saben los alcaldes provinciales, distritales, los gobiernos regionales, que van a tener que hacer realidad estos proyectos.

Entonces, estos fondos están orientados a ello, entonces, yo creo que señora presidenta, si nosotros vamos a pedir que esto hubiera sido de una forma regular como si no hubiera pasado nada en el mundo, en el país, los demás son apreciaciones eminentemente subjetivas, pero lo real es, lo objetivo es que la pandemia nos cogió a todos, nos generó este problema económico tan grave e igual el gobierno actual, tiene que batallar contra esa situación tan complicada, que muchas personas probablemente, por motivaciones de diferente índole, unos comprenden y otros ven que no es así, pero lo objetivo es eso.

Entonces, señora presidenta, yo consideraría, no quisiéramos perjudicar, hacer daño a estas municipalidades distritales, provinciales, regionales, solo tomando el tema de Yanapay, que también ha sido orientado a todos nuestros hermanos que menos recursos tienen, les ha servido, no creo que podamos traernos abajo estos decretos de urgencia.

No puede ser un delito, incluso de asistir a nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Alcanzarles un plato de comida

en un momento tan complicado, señora presidenta, no puede convertirse en un delito, por solo hecho de tal vez no coincidir en temas políticos e ideológicos.

Entonces, yo solicito a todos nuestros hermanos congresistas, que puedan aprobar este decreto de urgencia y no rechazar porque si no preguntemos al Ministerio de Economía y Finanzas, a detalle, como se han asignado estos recursos y eso también será importante en parte de este debate, si es factible de solicitar, para que, digamos, de lo que estamos actuando realmente está en concordancia con las necesidades, está en concordancia con lo que la población también requiere.

Entonces, no quisiéramos, por ejemplo, son cientos, miles de campesinos, que van a ser beneficiados, solo estoy mencionando un proyecto, Parco Chiquillay, hermanos como quedarían después de haber rechazado estos decretos de urgencia, realmente, su sueño de tener, hecho realidad sus proyectos, estarían excluidos y muchos de nuestros hermanos, muchos alcaldes, muchos alcaldes provinciales, distritales y gobernadores regionales, realmente y a través de ellos su población, su pueblo, estaría en peligro, viendo la realización y la constitución de estos proyectos.

Solo en esa línea, señora presidenta, poder siempre, hay un momento importante, de poder entendernos y al mismo tiempo poder comprender la situación que estamos atravesando, señora presidenta.

A todos los hermanos congresistas, les pido que pensemos también en nuestros hermanos. Si hubiera alguna situación irregular, más allá de un tema de interpretación de la normatividad, si hubiera algún tema fuera y que haya perjudicado al Estado, en ese caso, podría ser. Pero, en este caso, creo que todos estos recursos están orientados a poder atender a nuestros hermanos y, reitero, no podemos por temas políticos o por posturas ideológicas, convertir en un delito de alcanzar un apoyo que se materializa en víveres para nuestros hermanos, alcanzar un plato de comida tal vez para nuestros hermanos que menos tienen en el día, no se puede convertir en un delito, mi estimada presidenta y muy apreciada.

Muchas gracias, muy buenos días a todos, esperamos poder aprobar estos decretos de urgencia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Bellido. Solamente para aclarar, me parece que hay una confusión respecto al destino de los fondos aprobados en este decreto de urgencia, estamos hablando en primer término de la autorización de una transferencia de partidas.

¿Qué es lo que aprueba este decreto de urgencia? Es importante tener presente esto. La transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de 615'249,201 soles a favor del pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para financiar el pago del Bono Extraordinario Único de 210 soles a favor de los trabajadores

formales del sector privado.

Aquí no hay transferencia de partidas para obras públicas, para gobiernos regionales y locales, que se quedarían sin este tipo de actividades, porque no lograrían o no tendrían la transferencia y, en segundo lugar, es la autorización de una transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de 52'551,240 soles a favor de los pliegos de los gobiernos regionales y locales, pero no para financiar empleo productivo, ni ninguna obra, ningún proyecto de inversión, si no para financiar el otorgamiento de un bono extraordinario de 210 soles a favor del personal de sector público, que perciben menores ingresos, con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Entonces, la pregunta es, dónde está la situación imprevisible, urgente, considerando inclusive que en el informe de la comisión se señala que luego después de 39 días de publicado el decreto de urgencia, recién sale la resolución ministerial, a través de la cual se aprueba recién el padrón de trabajadores beneficiarios del bono extraordinario, es decir, que de urgente, después de 39 días, no tenía y los decretos de urgencia tienen que, efectivamente, tener este tipo de características, se dan frente a situaciones imprevisibles y situaciones de urgencia, como la de un sismo, como la de algún problema grave ocasionado por un problema de la naturaleza, un hecho de la naturaleza, entonces, eso en principio quería explicar, porque lo he escuchado, he escuchado a algunos de los congresistas, que creo que tienen un error.

Señor Bellido, por favor, estoy en el uso de la palabra.

Luego, tampoco se trata de ninguna manera o no se está imputando acá ningún delito que se haya cometido y, yo no dudo, de que haya de repente fines nobles, seguramente, podría ser que exista el interés de mejorar a los trabajadores formales del sector público y privado, sí, seguramente, pero también es importante precisar que estamos en la Comisión de Constitución y lo que estamos evaluando es definitivamente la constitucionalidad o no de la emisión de este decreto de urgencia que está regulado en la Constitución Política y además existe, desde el punto de vista de la interpretación de las normas pertinentes, existen condiciones para este decreto de urgencia, la emisión de estos decretos de urgencia y además, quiero recordarles a los señores congresistas, que cuando tuvimos acá al ministro de Economía y Finanzas, al señor Francke y se habían emitido los decretos de urgencia 86 y 100, en ese momento, se le mencionó que esa era competencia del Congreso de la República y que él tenía la posibilidad a través de un procedimiento célere, un procedimiento rápido, ágil, que nosotros estábamos dispuestos a asumir, venía al Congreso con su proyecto de Ley y es prerrogativa, por eso les pido a los señores congresistas, que es importante siempre establecer cuáles son nuestras funciones y no abdicar de ellas, porque si no, estamos rompiendo la institucionalidad, estamos rompiendo también el principio de separación de poderes. Es prerrogativa del Congreso

de la República, que puedan aprobar o no. Sin embargo, pasó un corto tiempo y nuevamente se expidió otro decreto de urgencia y otro y otro.

Entonces, no es posible, habiendo un Presupuesto de la República, no es posible que se esté haciendo un uso indebido y desmedido de una normativa que no corresponde al caso en particular.

Entonces, es por eso, que le voy a pedir a la secretaria técnica, que, para conocimiento de los señores congresistas, podamos leer un informe venido del doctor Domingo García Belaúnde, solicitado a los miembros del Consejo Consultivo con ocasión de la dación del decreto de urgencia 086 y que creo que es muy ilustrativo, para conocimiento de los señores congresistas.

En principio, reiterar, no estamos discutiendo, que seguramente la finalidad podría ser noble, seguramente, pero la forma, el procedimiento, el mecanismo, no es el adecuado.

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase dar lectura al informe del doctor Domingo García Belaúnde.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Señora presidenta, un momentito, podría darme, por favor.

La señora PRESIDENTA.— Que vamos a dar a conocer, que vamos a enviarles a todos los señores congresistas a través de la plataforma en este mismo momento.

Dé lectura, por favor.

La SECRETARIA TÉCNICA da lectura:

Señora congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Congreso de la República. Presente. De mi consideración. Me es grato hacerle llegar mis comentarios sobre los decretos de urgencia 086 y 100 2021, sometidos a control constitucional de la comisión bajo su presidencia. El concepto de decreto de urgencia surgió en el debate constitucional del Congreso Constituyente de 1993, doctrinariamente se llamaba decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia implican que el Poder Ejecutivo legisle libremente, lo cual es contrario a los fines del Parlamento y a lo que es la separación de poderes, o mejor dicho separación de funciones. Históricamente hablando, el Ejecutivo nunca ha legislado y tampoco recibía habilitaciones legislativas, esto es reciente, con motivo del desarrollo del Estado en las últimas décadas y la reasignación de las funciones del Parlamento. La carta de 1993 utiliza el concepto y lo precisa, con sus características, así consta en el derecho comparado y en la doctrina. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano sobre los decretos de urgencia, se ha limitado a recoger la doctrina europea sobre este tipo de decretos. La legislación solo la hace el Parlamento, pero la Constitución ha previsto que el Ejecutivo pueda legislar por autorización, decreto legislativo y por emergencia, a través de los decretos de urgencia. El contenido materia económica financiera es amplio, sin embargo, la misma*

Constitución contempla prohibiciones, así, los decretos de urgencia no pueden crear tributos, ni aprobar modificaciones al Presupuesto, ni incluir aquello que tenga reserva de Ley. Si la Constitución es una unidad, no puede pensarse que el artículo 80 es una excepción, para que lo fuese, el mismo texto fundamental tendría que decirlo expresamente y no lo hace. El presupuesto es estructura clave en el Estado, aún más, el Parlamento nace precisamente de la necesidad de controlar los gastos, desde la Carta Magna de 1215. Insisto, si la Constitución es una unidad, **(4)** no puede pensarse que el artículo 80 es una excepción al artículo 118, inciso 19; para serlo debería decirlo expresamente.

En los regímenes europeos existe mayor control sobre la legislación de urgencia, denominadas decretos ley. Si el Congreso no los convierte en ley en Italia o no los convalida en España, caducan automáticamente.

El hecho de que en los últimos años se hayan usado de manera excesiva y abusiva los decretos de urgencia, no justifica que ahora se siga haciendo, de acuerdo con un viejo aforismo jurídico, el error no genera derecho.

El artículo 80 de la Constitución, es una norma jurídica de carácter general que no tiene excepciones. Es más, esta norma es una norma de excepción al artículo 118, inciso 19, no es al revés.

Lo que está haciendo el Congreso al declarar que tales decretos de urgencia son inconstitucionales, es la interpretación correcta. Los fines que tales decretos de urgencia persiguen son nobles y necesarios, pero no guardan las formas. En el derecho las formas son sustanciales.

Lo que debe hacer el Ejecutivo es lo contrario, enviar los proyectos de ley al Congreso y que este les dé el trámite de urgencia.

En resumen, como norma general, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de urgencia en materia económica y financiera. El concepto económico y financiero es un concepto indeterminado, que se precisa en cada caso de acuerdo a la sana interpretación.

Dicha norma general puede tener excepciones. Estas excepciones no las fija la doctrina nacional ni tampoco la jurisprudencia ni menos un ministro de Estado, lo hace la propia norma constitucional.

La Constitución crea excepciones, entre las cuales tenemos el artículo 74, Tributos; el artículo 80, Temas presupuestales.

Los decretos de urgencia enviados al Congreso son decididamente inconstitucionales.

Sin más sobre el particular, les reitero las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Domingo García Belaunde.

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. Vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Moyano, que ha solicitado, y luego la congresista Echaíz.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta, yo quería usar un minuto del tiempo, si es posible.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Bellido, en un momento, luego después en la segunda ronda, después de las dos congresistas que he mencionado puede usted hacer uso de la palabra.

Congresista Moyano, tiene la palabra.

¿Congresista Moyano?

A ver, vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Echaíz, hasta que tengamos a la congresista Moyano.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias, presidenta.

El decreto de urgencia que es materia de análisis en este momento, es el 105 del 2021, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público.

En consecuencia, no tiene que ver con los argumentos que se expusieron con relación al sector Agrario.

Creo, que en anteriores oportunidades hemos conversado sobre el tema de los decretos de urgencia que aprueban créditos suplementarios, y que precisamente tienen un trámite especial porque guardan relación con el equilibrio presupuestal que debe existir a efecto de evitar consecuencias económicas funestas para el país.

Estos decretos de urgencia, tal como ya ha quedado establecido, y bien lo ha dicho la presidenta de la comisión, al exponer y sustentar el predictamen, exigen determinadas condiciones y presupuestos, entre ellos la excepcionalidad, que está orientada a que se den situaciones extraordinarias e imprevisibles.

No sé qué de imprevisible tendría darles un bono a los trabajadores del sector público y privado que no se han visto, por lo menos, afectados o en una situación de emergencia o privados de su remuneración como para que se les atienda de una manera urgente, más aún si es para aquellos que ganan hasta dos mil soles.

El criterio de necesidad que creo que en este caso deberíamos detenerlos a mirar, demandan una medida de prevención en razón de la excepcionalidad.

Es necesario atender una situación emergente que se presentó en este sector, pero pasaron más de 30 o 40 días, conforme nos han hecho conocer, hasta que se determinara quiénes eran los beneficiarios. ¿Cuál era la emergencia? ¿Cuál era la necesidad?

En realidad, lo que se quería en el fondo es darle un bono a los trabajadores del sector público y privado para palear seguramente lo que se considera una baja remuneración, pero no por una

situación de emergencia o por una situación de necesidad; no se da ni uno, ni el otro presupuesto, como tampoco lo de la transitoriedad.

¿Qué se solucionó con el tema del bono?

Sí se afectó el fondo de contingencia, que debe estar ahí para situaciones precisamente que reúnan esas exigencias de la imprevisibilidad, de la necesidad, de la urgencia.

¿Qué pasaría si mañana hay un terremoto? ¿Qué pasaría si mañana hay un desborde, un derrumbe que deja a un sector de la población en una situación realmente emergente?

El fondo se agotó por una situación que podía esperar. Además, porque no se previó eso en la Ley del Presupuesto Público, si precisamente estábamos en los tiempos del debate de esa ley.

No se dan, señores, los presupuestos que establece la ley. Además, la Constitución encargó al Congreso cumplir esa función de control para evitar situaciones como las que hoy nos ocupa.

Nosotros tenemos aquí una función de guardianes, digamos. De guardianes del orden de la legalidad y del control del gasto público, de la manera eficiente, de la manera eficaz y orientada a cumplir los fines para los cuales se asignó a los representantes, los fines asignados a los encargados de manejar los dineros del Estado.

¿Cómo sería si nosotros les damos pase a cualquier cosa? Nosotros incumpliríamos nuestra función y estaríamos sí también incurriendo en una infracción constitucional por omisión en el cumplimiento de nuestros deberes funcionales.

Esto es evidente, señores. Este decreto de urgencia no responde a ninguno de los presupuestos que la Constitución, la ley, la doctrina, jurisprudencia, exigen como para que sea aprobado.

Creo que los criterios de humanistas, de apoyo a la población, al necesitado, son atendibles; pero todo tiene una forma, todo tiene un lugar.

Si queremos ayudar a la población, hagámosla de tal forma que mañana no se quede sin el pan por medidas de esta naturaleza; hagámosla de tal forma que mañana cuando haya una excepcionalidad, una urgencia, una necesidad imprevisibles, el Estado tenga cómo poder ayudar, pero no de esta manera.

Por favor, ayudemos al ministro de Economía o a quien ejerce su función, a que cumpla a cabalidad sus funciones y que resguarde debidamente los dineros del Estado para los tiempos que realmente se requieren esos fondos de contingencia.

Hay que apoyar a la población, sí. ¿Cómo? En la forma y medida y disponibilidad que tenga nuestra recaudación tributaria y en la forma equilibrada que debe manejarse un presupuesto.

Es lo que quería decirles, señora presidenta.

Serenidad y calma. Apoyo a la población, indudablemente. Pero, de tal forma que le abramos los nichos, las brechas, las formas de generar productividad, de generar emprendimiento, de generar formas de trabajo permanente, no paliativos que tengan incidencia grave en la economía del país.

Eso es lo que yo quería decirle, señora presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Moyano, tiene la palabra.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidenta. Disculpe, había un problema de conexión.

Precisamente, presidenta, estamos ahorita en un debate de un decreto de urgencia, cuya propuesta es derogarla. Soy miembro de la Comisión de Revisión de Decretos de Urgencia, de control, en este momento también.

Creo, presidenta, que todos los parlamentarios debemos tener en cuenta algo. Somos miembros de la Comisión de Constitución, se supone que debemos conocer la Constitución, y se supone, presidenta, que debemos además establecer reglas estrictas de defensa de la constitucionalidad de las normas, porque si no estaríamos abdicando, como usted bien dice, sobre nuestra propia actividad en el Parlamento.

Estos decretos de urgencia, no solo este, presidenta, sino varios decretos de urgencia no son de interés nacional, son de medidas urgentes. Lo que tienen que entender los parlamentarios que están defendiendo el decreto de urgencia, tienen que entender que se está vulnerando la Constitución.

Cuando alguien comete una infracción constitucional que tiene un rango, sea parlamentario, presidente o ministro, o rangos de altas magistraturas, tienen que entender que van a tener una consecuencia, porque el que infringe la Constitución tiene una sanción, Primer lugar.

Segundo lugar, no pueden estar gobernando con decretos de urgencia, repartiendo la plata del presupuesto, el erario nacional, con decretos de urgencia, porque también podríamos decir, señora presidenta, así como me antecedió el congresista que hablaba de términos ideológicos, no tiene nada que ver esto con temas ideológicos, porque también podríamos decir que se está usando los decretos de urgencia para hacer proselitismo político, y eso no puede ser, no lo podríamos concebir de esa manera.

Cuando el Ejecutivo quiera ampliar el presupuesto, digamos, o sacar presupuesto para que pueda ir a los trabajadores u obras de otra naturaleza, le corresponde presentar un proyecto de ley de crédito suplementario, fácil, concreto, lo presenta; el Congreso de la República tiene que tratar el proyecto de manera inmediata, así está establecido en las normas, está establecido en la Constitución.

¿Dónde está la flojera de presentar un proyecto de ley de crédito suplementario y que nosotros rápidamente tendríamos que responder como Parlamento, para que eso sea atendido ante el pedido del Ejecutivo?

No, están prefiriendo gobernar con decretos de urgencia y luego traer el mensaje simple, es decir, que el Parlamento está en contra de la gente que quiere recibir sus bonos y obras, etcétera, etcétera, presidenta.

Esto no es un argumento y menos aún de un parlamentario o de los parlamentarios que tenemos que defender el equilibrio de poderes, la Constitución, por supuesto, defender las autonomías y por supuesto que vigilar y defender el presupuesto, el erario nacional.

No se puede estar repartiendo la plata con decretos de urgencia.

Yo estoy de acuerdo con este dictamen, no reúnen los requisitos y no solo no reúne, sino que además incumple una parte de la norma que dice que tiene que informar con anticipación este decreto de urgencia ante el Parlamento. Eso, tampoco han cumplido.

Yo le invoco a los parlamentarios que están defendiendo el decreto de urgencia, y los respeto también porque tienen que defender obviamente a su Ejecutivo, pero no pueden defender algo contra la Constitución, no pueden defender algo contra la norma, no pueden defender algo contra la institucionalidad.

Fácil, presidenta, hay que colocar también al final, *seguir exhortando al Ejecutivo que cumpla y defienda la Constitución*, porque además hay un artículo que dice que *una de las funciones del presidente es cumplir y hacer cumplir la ley*, y aquí también están cometiendo infracción. (5)

Presidenta, yo estoy de acuerdo con el dictamen y voy a votar a favor.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Moyano.

Congresista Bellido.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muchas gracias, presidenta.

Sería importante, antes de votar, explicitar para mayor precisión la presencia del viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García, o en su defecto al ministro de Economía, para que puedan explicar con precisión, exactitud, estas asignaciones.

Uno, eso es importante, importante con nuestra decisión de rechazar estos decretos de urgencia, quiénes y de qué manera se estarían perjudicando.

Con todos los respetos y las consideraciones, la congresista que me antecedió, claramente ha explicado los propósitos y las consecuencias. Entonces, también nadie puede negar que hay propósitos políticos que llevan también a una decisión y aprobación de esta naturaleza.

Yo pienso, considero, que no es repartir la plata, no es como sentarse en una esquina y estar repartiendo la plata, sino son asignaciones que están argumentadas. Y obviamente esta decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, sus áreas que corresponden han argumentado debidamente y han motivado debidamente.

O sea, no podemos decir que todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, no conoce la norma, no sabe lo que está haciendo, no se trata de eso; sino aquí hay dos formas de ver, de entender; y hay dos formas de interpretaciones.

Para muchos será una emergencia y una necesidad, pero para otros probablemente no, para el que tiene probablemente no, pero para el que no tiene ese momento es una emergencia.

Entonces, yo solicito, señora presidenta, antes de la votación, si es posible, solicitar la presencia, reitero, del viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García o en su defecto al ministro de Economía, para que puedan explicarnos con precisión.

Nada más, señora presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA. — Muchas gracias, congresista.

Bueno, entiendo que en su momento, cuando a la congresista Tudela le toque intervenir, mencionará que efectivamente el ministro de Economía, el viceministro, han estado en el grupo de trabajo de Control Constitucional, pero también han estado en la Comisión de Constitución.

Y, precisamente, a ellos les hemos exhortado que efectivamente se tiene que cumplir el procedimiento establecido.

Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Soto.

El señor SOTO PALACIOS (AP). — Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero saludar también a todos los congresistas presentes, tengan ustedes muy buenos días.

Señora presidenta, yo creo que tenemos que respetar la Constitución Política, independientemente que estemos en la pandemia.

Bueno, para mí, el artículo 80 está totalmente clarito, ¿qué dice en su tercer párrafo? *Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto.*

Está totalmente claro.

El tema de predictamen en materia de discusión sobre el Decreto de Urgencia 105, bueno pues no ha cumplido los requisitos establecidos en la Constitución Política, como reitero, el artículo 80 y el artículo 118, en su inciso 19, yo creo que estamos en lo correcto.

Yo puedo coincidir también con la opinión de la congresista Moyano, donde ha señalado efectivamente el Poder Ejecutivo nos debe enviar un proyecto de ley sobre créditos suplementarios.

Estoy seguro, señora presidenta y colegas congresistas, nosotros podemos aprobarlo, creo que gran parte. Eso sería el canal, el procedimiento. Pero, aquí estamos haciendo lo contrario.

Yo estoy totalmente a favor, por ejemplo, con el personal del sector privado, sector público; claro estamos en un momento, de repente, difícil, una coyuntura difícil, pero hay procedimientos.

La Constitución Política es clara, por qué hacer lo contrario. El Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley, estoy seguro que los miembros titulares de la Comisión de Constitución lo vamos a apoyar.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Soto.

Congresista Quito.

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Muchas gracias, presidenta. Y saludar, por intermedio suyo, a todos los congresistas presentes.

Todos, creo, que estamos viviendo esta realidad, tenemos cerca de 12 congresistas que han dado positivo con esta tercera ola, y muchos también de los que están presentes hoy, el cual también expreso mi saludo a todos ellos y ver que están bien de salud es muy positivo.

Pero, también esto afecta a toda la población. No hemos salido de esta pandemia. La emergencia sanitaria y económica continúa. Se ha planteado la tercera ola, y eso es lo que en estos momentos estamos viviendo, y los más afectados en estos momentos son los trabajadores, y los trabajadores de baja escala remunerativa.

Y, ¿cuántos van a ser los beneficiados con este decreto de urgencia?

No se trata solamente de defender al Poder Ejecutivo, no, no. Se trata de ver los intereses también de un grupo, de un grueso sector de la población. Son tres millones de trabajadores de forma directa los que se van a beneficiar, y que supera los 10 millones de personas que indirectamente se beneficiarían con este bono único, de 210 soles que se estaría dando.

Creo también, está clarísimo, porque podemos dar de acuerdo al cristal que tengamos podemos dar nuestras opiniones.

En el artículo 118, el inciso 19, claramente señala, *dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera*. Y este es un tema extraordinario, que se va a beneficiar un grueso sector de la población.

Y, es más, el Ejecutivo está dentro de esa potestad de emitir este tipo de decretos de urgencia. No es ningún despilfarro, ni mucho menos, sino es un apoyo a las familias trabajadoras, que por cierto también estoy de acuerdo que se debe aumentar el sueldo mínimo.

En todo caso, no puede ser de ninguna manera cualquier cosa el que a doce millones de personas que de forma indirecta se puedan

beneficiar. Y en otras palabras, es la población, son los trabajadores formales los que aportan con sus impuestos al erario nacional, y hacer una disposición, un decreto de urgencia en beneficio de ellos, de ninguna manera puede ser una cuestión.

Además, aquí, los que debemos de tener un criterio en el Congreso, en ese sentido de beneficio, de beneficiar a los que aportan al erario nacional, no es de ninguna manera omitir la Constitución, muy por el contrario.

Además, a mí me gustaría, me pongo a elucubrar, a pensar, que den un decreto de urgencia, como fue el caso de Reactiva Económica, donde miles de millones se fueron a dar al sector privado, ¿cómo sería el actuar de esta comisión?

En ese sentido, quiero reiterar que este decreto de urgencia es para beneficiar a un grueso sector, a millones de peruanos que se estarían beneficiando con este bono extraordinario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Quito.

Congresista Aragón.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias, señora presidenta.

Bueno, este Decreto de Urgencia 105-2021, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos, tenemos que encuadrarlo dentro del marco jurídico constitucional, dentro del marco social, dentro del marco económico.

Entonces, el análisis que se tiene que hacer de este decreto de urgencia, pasa por esos tres aspectos o facetas, constitucional, social y económico.

Por supuesto que los tres aspectos son importantes, la norma jurídica es importante, el estado constitucional del derecho es fundamental, las necesidades sociales de la población, de los futuros beneficiados dentro del sector público o privado también, y el marco presupuestal del Estado también, por supuesto.

Entonces, el análisis, creo yo, tiene que hacerse bajo esos tres aspectos.

Uno. Si nos referimos al marco jurídico constitucional, si bien es cierto en el artículo 118 de la Constitución del Estado, corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, etcétera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso, también se señala y se dice, *el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia, de acuerdo a sus competencias.*

A ver, este decreto de urgencia, de acuerdo a lo que establece, a los requisitos formales señalados en la Constitución Política del Estado, tiene que encuadrar, porque la Carta Magna nos dice, en materia económica y financiera, no en materia tributaria.

Entonces, ¿este requisito cumple el Decreto de Urgencia 105? Nos preguntamos. A priori, no cumple; por regular materia presupuestal, con reserva de ley. Entonces, eso, de conformidad con el principio de legalidad presupuestaria, está reservado para la emisión de normas que aprueban la transferencia de partidas, pero a través de leyes sí y solo sí, aprobadas por el Congreso de la República y no por una norma con rango de ley.

Entonces, el decreto de urgencia examinado, creo yo, claro, no encuadra dentro del principio de balance de poderes del Estado. El Poder Ejecutivo tendría tanto la facultad de presentación, aprobación, ejecución de una transferencia de partidas; no pues, no puede ser así. Porque, esta es una tarea que corresponde al Congreso de la República. El Congreso de la República está legitimado, puede participar y debe participar en materia presupuestal.

Ahora, sobre las causas, las causas que llevaron a su emisión. Se nos dice, señora presidenta, una situación extraordinaria, de interés público. Por ahí, algunos colegas pueden decir, bueno, *la situación extraordinaria o imprevisible ha sido ocasionada por la pandemia, el Covid-19*. En esa línea, bueno podríamos decir que el tema del Covid-19 es una crisis sanitaria, que no hay una solución y control global simultaneo a la misma.

Entonces, en el caso concreto a la fecha de emisión del presente decreto, porque fue el 14 de noviembre de 2021, el decreto de urgencia, se tenía conocimiento que los efectos de la pandemia seguirían en el país, se sabía que seguía en el país.

Entonces, ya el tema del Covid ha perdido excepcionalidad, ha perdido ya el carácter de excepcionalidad, ¿qué es excepcionalidad? Apoyamos hablar cuando inicio el Covid, el año 2020, pero ahora ya estamos 2021, 2022. Entonces, no cumple con el criterio de generalidad y de interés público, en ese entender. Entonces, hay que tener mucho cuidado.

Efectivamente, este decreto de urgencia no es para ejecución de obra pública, acá no deben estar afectados los alcaldes, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, no. Es para las personas de a pie.

Nadie está en contra, todos estamos a favor que todo el mundo necesita esos 210 soles, por supuesto. Pero, por eso, dentro de la fórmula legal, señora presidenta, dentro de la fórmula legal que tendría que aprobarse, entiendo que está así en el artículo único, se tendría que decir, **(6)** *se deroga el Decreto de Urgencia 105-2021, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector público y privado con menores ingresos –y con esto termino mi intervención– sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación de la transferencia de partidas contenidas en la norma derogada a la fecha de la emisión de la presente ley.*

Si esto se pone, *sin perjuicio del gasto público ejecutado*, entonces ya no va a estar perjudicado ningún personal del sector público, del sector privado, etcétera, etcétera.

Ahora, claro, hay partidas, imagino que todavía no han sido ejecutadas. Entonces, podríamos decir, y eso habría que debatir, *sin perjuicio del gasto público ejecutado y por ejecutarse*, porque para el sector público entiendo que ya se ha ejecutado, pero para el sector privado obviamente esto está en vía de ejecución; pero que sirva como referente para que de aquí en adelante, de aquí a futuro, ya no se pueda emitir otros decretos de urgencia, digamos, con esa finalidad, en realidad la razón de ser de este Decreto de Urgencia 105.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón.

Solamente para información, el pago de este bono al sector público ya se ha realizado por completo, solamente estaría pendiente alguna parte del bono al sector privado.

El bono es de 210 soles, eso es lo que sabemos. Pero, eso es lo que quería mencionar. Al sector público formal, porque este bono recordemos está dirigido al sector formal, al sector público ya se ha realizado.

Vamos a tomar lo manifestado por usted, congresista Aragón.

Gracias, por su aporte.

Congresista Cerrón.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Muchas gracias, señora presidenta.

En ese mismo orden de ideas también, solicito que se dé lectura al informe del doctor Francisco Eguiguren, que es constitucionalista y también al informe de la Defensoría del Pueblo, para tener mayor alcance al respecto.

Gracias.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Una pregunta, señora presidenta. Me gustaría escuchar el fundamento de por qué...

La señora PRESIDENTA.— Quería mencionar que la información que me da la secretaría técnica, es que no son documentos que han sido remitidos a la Comisión de Constitución.

Nosotros hemos dado lectura al informe del doctor García Belaunde, porque es un informe que ha sido dirigido a la comisión; pero, sin perjuicio de eso y con el ánimo de que exista la mayor información para la toma de decisiones, vamos a dar la indicación a la señora secretaria técnica, para que pueda compartir el informe del doctor Eguiguren y el informe del doctor Samuel Abad, sin perjuicio de también compartir la posición del doctor César Ochoa y del doctor Baldo Kresalja, exministro de Justicia.

Vamos a compartir toda esa información para conocimiento de los señores congresistas.

Bueno, vamos a...

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Una consulta, señora presidenta, si me permite.

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Echaíz, tiene la palabra.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Tengo una preocupación.

Qué significa o cuáles son los alcances de la propuesta que se hace en el predictamen, en cuanto dice, *sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación de las transferencias de partidas contenidas en la norma derogada*.

Este no es el primer decreto de urgencia que aprueba el Ejecutivo. En el primer decreto de urgencia, que si mal no recuerdo fue el 080, tal vez se justificó, que se diga *sin perjuicio*; pero luego se sucedieron otra serie de decretos de urgencia, y si vamos a ir convalidando, pues entonces dejemos sin efecto o pasemos por alto la norma constitucional, porque ya el presupuesto puede hacerse de él lo que quiera, y el equilibrio presupuestal sería sencillamente un lirismo, y un lirismo fácil de incumplir porque en el Congreso, que ejerce el control de constitucionalidad y el control del equilibrio de ese presupuesto, pues sencillamente da por bien hecho lo que ya se hizo mal.

Y lo que es nulo es nulo, nulo de puro derecho y nulo en todos sus efectos.

Quiero por eso, una explicación de que se me diga el por qué o qué significa eso, *sin perjuicio de*..

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Echaíz.

Lo que ocurre es que lamentablemente, efectivamente los bonos ya han sido entregados en muchos de los casos y es cierto lo que usted señala.

Lamentablemente, no podemos retrotraer la citación anterior a la dación del decreto de urgencia, sin embargo, creo que en la Comisión de Constitución la propuesta sería que todos podamos votar con la finalidad de que exhortemos al ministro de Economía a que se abstengan de utilizar este tipo de instrumentos, llámese decretos de urgencia para aprobar este tipo de créditos suplementarios o ampliaciones de presupuesto.

De tal manera, que en atención al principio de reserva de ley, pueda hacerse de la manera como la Constitución lo señala, y todo gasto deba pasar por el Congreso de la República.

Me gustaría poder tocar este tema y pasarlo para verlo como último tema de Orden del Día, para aprobar esta moción, porque como vuelvo a repetir, congresista Echaíz, el pago, por ejemplo, del bono a todo el sector público ya ha sido realizado.

Entonces, como quiera que recién el 23 de diciembre se ha alcanzado la relación de trabajadores para el sector público, está aún pendiente de realizar o imagino que se ha realizado parcialmente.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— En todo caso, presidenta, disculpe usted, tendría que determinarse cuál es la consecuencia de este accionar. La consecuencia, no sería sin perjuicio de; sino que pase a la Comisión de Acusaciones para los efectos legales correspondientes y que se determinen las responsabilidades del caso.

Me parece a mí, no sé, lo pongo ahí a la Mesa, para que se analice.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta, la palabra, presidenta.

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Presidenta, la palabra. Congresista Caveró, también por favor.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta.

La señora PRESIDENTA.— ¿Quién es? ¿Congresista Bellido?

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Sí, presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Bellido, tiene la palabra.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muchas gracias, presidenta.

Realmente, un poco sorprendido porque querer volver a recibir de la gente que ya recibió los bonos, o este apoyo económico, va a ser bastante complicado.

Decirles que devuelvan lo que han recibido y eso creo que no puede ser de esa forma. Cómo le dices a una persona que ya recibió, *no te correspondía, tenía que aprobar el Congreso y por un decreto de urgencia no se podía darte, lo aprobamos en el Congreso y recién te lo damos.*

Yo no creo que la cosa podría ser por ahí, señora presidenta. Lo que sí aquí es lo segundo, que hay propósitos más allá de un control regular que se debe hacer, sino hay otro propósito, y el tiempo nos va a develar en realidad esos propósitos y esos objetivos.

Entonces, yo reitero, por ejemplo, el pedido del congresista Cerrón, que se dé lectura, se nos está pasando, pero también sería importante públicamente se pueda dar la lectura correspondiente de estos informes para que la población sepa lo que está pasando y eso en aras de tomar mejores decisiones, siempre es importante.

Reitero, yo sé que muchos congresistas no están de acuerdo y los demás, pero hay hermanos que realmente están en una situación precaria en el tema económico y hay que atenderles, hay que darles un apoyo, y eso es el bono Yanapay, no es como algunos congresistas piensan que es repartir, por eso se entiende repartir, o sea no estar distribuyendo dinero así por así.

Entonces, quiere su sustento y en una situación de crisis económica en la que estamos, obviamente para los congresistas probablemente no hay crisis económica, pero para la gente de a pie, para la gente

que día a día está en el sector privado o público, la situación es muy, muy complicada, señora presidenta.

Espero que se pueda tomar en cuenta, y no hagamos este perjuicio a la gente que ya ha recibido.

Muchas gracias.

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Presidenta, la palabra, por favor, Caverero.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Caverero.

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Gracias, presidenta.

Yo quiero citar aquí, lo que acaba de mencionar el congresista Bellido, me parece bien grave.

Él ha dicho textualmente, abro comillas, *existen propósitos más allá de un control regular que se debe hacer.*

O sea, cuando existen propósitos altruistas o que algún sector político considera altruista, entonces pisoteamos el estado de derecho, hacemos como nos da la gana las cosas, no tomamos en cuenta las reglas, el control de poderes y lo que establece la Constitución del Perú.

Yo creo, y en esto suscribo a mi colega Echaíz, que esto amerita por lo menos una acusación constitucional, porque esto es una gravísima infracción a la Constitución y a lo que establece el artículo 80, como ya lo han explicado a la sociedad varios de mis colegas, incluido el congresista Soto y varios otros que lo han explicado con bastante claridad.

Sobre la urgencia, señora presidenta, en la sociedad peruana, desde la independencia, desde el Virreinato ha existido esta necesidad en el Perú. Para eso no han sido diseñados los decretos de urgencia, los decretos de urgencia tienen otra finalidad, otra finalidad constitucional.

Esta tercera ola además, señora presidenta, tiene características muy diferentes a lo que fue la primera y la segunda ola. Hoy día la economía está relativamente bastante, digamos, más abierta de lo que estaba al comienzo, funciona con relativa normalidad.

Lo que está en emergencia, presidenta, es la capacidad de este gobierno, eso es lo que realmente está en emergencia.

Tenemos una crisis que sigue, porque hay una paralización brutal de la inversión minera, hay una paralización de la inversión privada, una caída histórica en la inversión privada, en la economía, hay una ausencia de capacidad de inversión pública de un Estado absolutamente incapaz de ejecutar el dinero, y claro la salida más fácil evidentemente es esos recursos que no se pueden ejecutar, que no se pueden gastar por una tremenda incapacidad de gobierno, ah se les regala a la gente y se usan los fondos de contingencia con la mayor irresponsabilidad.

Aquí lo que se está haciendo, presidenta, es buscando hacer populismo barato y crear un Estado asistencialista sin criterio técnico. Yo quiero no pensar para fines políticos electorales. Entonces, pisoteando el estado de derecho y pisoteando la Constitución.

Yo creo que esto, señora presidenta, es gravísimo, aquí ya lo han sostenido mis colegas. Si queremos ayudar a los ciudadanos y mejorar la crisis económica, vayamos a los temas de fondo, reactivemos la inversión privada, busquemos cómo crear empleo, cómo crear confianza, cómo reactivar la inversión pública; no busquemos la salida facilista, asistencialista y populista, que le hace un tremendo daño además en el camino, pisoteando el estado de derecho.

Eso sería mi comentario.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cavero.

Bueno, si no hay otra intervención...

La señora MOYANO DELGADO (FP).— La palabra había pedido, presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Moyano y luego a la congresista Tudela, y luego damos por finalizado el debate y vamos a presentar el texto con las propuestas realizadas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— La lectura faltaría.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Cerrón.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— La lectura que pedí, por favor.

La señora PRESIDENTA.— Como le vuelvo a repetir, la disposición es que se distribuya, porque no ha sido dirigida a la Comisión de Constitución. (7)

Yo no tengo el permiso de quien emite el dictamen, perdón, el informe, usted menciona el doctor Eguiguren y el doctor Samuel Abad, para que sea leído en la Comisión de Constitución. Es un documento que no está dirigido a la comisión. Entonces, por eso, lo que hemos dispuesto es, bueno, que sea distribuido, pero no podemos darle lectura.

Tiene la palabra la congresista Moyano.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Sí, presidenta, en la misma línea de la congresista Echaíz, creo que tenemos que revisar con mucha sapiencia la decisión de que al momento de derogar, estamos dejando en libertad que ese dinero que se haya usado, mal usado, porque hay que recordar algo presidenta, cuando un funcionario público de menor rango usa un dinero que está destinado para una cosa y lo usa para otra, es malversación, es acusado, denunciado, merece una sanción.

En este caso, obviamente, es un dinero que es del erario nacional, no presupuestado, no está dentro de las normas de presupuesto, pero, el ministro es el responsable del cuidado y la custodia, la administración debida del Presupuesto nacional y nosotros somos los responsables de la vigilancia y fiscalización de que el gasto se dé de acuerdo a la norma.

Sí me asusta estas formas de pensar, presidenta, de como se presenta tan simple el asunto y además como cambian el contenido del decreto, en este caso, estamos hablando de un decreto que dieron, que otorga bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público. No está hablando, siquiera, de algún bono Yanapay, que, además, forma parte de un programa y que no tendría por qué tener un decreto de urgencia.

Para quedar claro, porque a veces hay parlamentarios que hablan al último y eso es lo que queda en la opinión pública.

Para que quede claro, el congresista Bellido, con todo respeto y cariño, el congresista Bellido, está distorsionando lo que estamos debatiendo.

Pero, sí me preocupa es conclusión y que creo sí, presidenta, deberíamos revisar bien, cómo es que vamos a determinar si derogamos los decretos de urgencia que son infracción constitucional, que tiene consecuencias, como lo dice el congresista Cavero, cómo después terminamos poniéndole un gorro o algo que determine que no perjudicaría a la población, pero cuando ya se hizo ese decreto, ya se cometió la infracción y la infracción es, precisamente, haber destinado este dinero.

Hay que buscarle, presidenta, una forma, porque si no pues, estaríamos hablando en el aire, como castigamos, como se le exhorta a alguien que ya se le exhortó al cumplimiento de la Constitución, como se le va a volver a exhortar cuando estamos viendo que reiteradas veces le importa un pepino la Constitución y puede hacer lo que quiera con decretos de urgencia, porque al final lo vamos a derogar, sí, pero no tiene sanción y se va a seguir incrementando lo que ellos han decidido.

Creo que debemos tomar alguna propuesta o solución, presidenta, en este caso.

Yo propongo que, de repente, se vea en estos momentos que cosa hacer con esos decretos de urgencia, casi todos tienen la misma situación, presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Tudela.

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Muchas gracias, presidenta.

Un gran constitucionalista y ex senador de la República, el señor Manuel Vicente Villarán, señaló, hace muchísimos años, lo siguiente: *"De nada sirve que el Congreso dicte un sabio Presupuesto, si el gobierno lo infringe impunemente, trasladando*

el dinero de unas partidas a otras o creando nuevos gastos con pretexto de necesidades no satisfechas”.

Creo que esta cita debe ser recordada hoy, más que nunca, porque el Estado no genera riqueza, el dinero que tiene el Estado es el dinero del contribuyente, es el dinero de los ciudadanos y nosotros como Congreso de la República, tenemos el deber de representar a la ciudadanía y como representantes de la ciudadanía, cuidar que ese dinero que es del contribuyente, sea bien administrado.

La Constitución existe para algo, establece ciertos límites al ejercicio del poder político y que existan gastos imprevistos, que existan emergencias y las necesidades que pueden generar esas emergencias no justifican bajo ningún punto de vista el atropello del texto constitucional, sin perjuicio de la discusión respecto a la necesidad de estos bonos, las formas sí importan.

Es necesario que se cumpla con lo prescrito por lo que señala la Constitución, porque el Estado no genera riqueza, el dinero que tiene el Estado es del ciudadano que es representado por el Congreso de la República y por eso todos los años nosotros aprobamos la Ley de Presupuesto y por eso toda alteración a esta Ley de Presupuesto, tiene que también pasar por el Congreso de la República.

Este decreto de urgencia, incluso fue aprobado luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto, fue aprobado el 14 de noviembre.

Entonces, no me explico, porque el Mef no incluyó esta provisión dentro de la Ley de Presupuesto y decidió pasar por encima del Congreso de la República, pasar por encima del texto constitucional para emitir esto a través de un decreto de urgencia.

El congresista Cerrón ha señalado que por favor se dé lectura de unos informes remitidos por el constitucionalista Eguiguren y por Samuel Abad. Yo entiendo que el informe que está haciendo referencia el congresista Cerrón, del señor Abad, es un informe de Defensoría del Pueblo del año 2006, por lo tanto, no lo tenemos acá en la Comisión de Constitución, sin embargo, el jurista Eguiguren sí fue citado al grupo de trabajo para exponer su postura y aquí sí me gustaría ser bastante clara. El señor Eguiguren aun teniendo una visión, digamos, favorable a hacer una interpretación abierta del artículo 80 de la Constitución, fue clarísimo a la hora de señalar que los decretos de urgencia tienen que cumplir con ciertos requisitos que, en este caso, sin perjuicio de la inconstitucionalidad, es decir que no se está cumpliendo con lo prescrito en el artículo 80, tampoco se está cumpliendo con los requisitos que deben reunir los decretos de urgencia.

No se está cumpliendo con el criterio de excepcionalidad e imprevisibilidad y tampoco con el criterio de necesidad, entonces, ni por una ni por otra, no se cumple con el artículo 80 e incluso para quienes el artículo 80 debe ser interpretado de manera abierta, estos decretos de urgencia tampoco reúnen los requisitos que deberían cumplir los decretos de urgencia.

El Mef ha debido tomar en consideración el hecho de que podía enviar un proyecto de Ley a esta comisión y al Congreso y que lo íbamos a tratar de manera urgente y prioritaria.

El ministro de Economía, Pedro Francke, fue invitado a esta comisión, el viceministro Guerra García, también estuvo presente en esta comisión y fueron advertidos por los congresistas que integran esta comisión respecto a que se estaban pasando por encima de lo que señala el artículo 80 de la Constitución, cuando fueron emitidos los primeros decretos de urgencia, el 86 y el 100 que también aprobaban créditos suplementarios y que también transferían partidas en contra de lo que señala el texto constitucional.

Y nosotros les advertimos, expresamente, respecto a esta infracción y los invitamos a presentar un proyecto de Ley para que sea aprobado por el Congreso de la República, sin embargo, hicieron caso omiso a pesar de las advertencias.

Entonces, acá, contra lo que señala el congresista Bellido, el Congreso no está en contra de que se entreguen bonos, el Congreso no está en contra de la población, más bien parece ser el Mef el que no está tomando las previsiones correctas y está haciendo caso omiso de los llamados y de las advertencias que ya les hemos hecho con anterioridad a la emisión de este decreto de urgencia en particular y en ese sentido, a mí, si me gustaría, desde esta comisión, exhortar al ministro de Economía que envíe su proyecto de Ley, el Congreso lo va a tratar con carácter de urgencia y de hecho ya hemos aprobado en el último Pleno, la aprobación de un crédito suplementario.

No hay absolutamente nada que le impida al Mef, mandar un proyecto de Ley y no hay nada que le impida al Congreso aprobar.

Creo que es importante, también, hacer referencia a lo que ha señalado el congresista Bellido. La economía no se reactiva a base de bonos ni a base de gasto público. La economía se reactiva con inversión privada. Se reactiva con generación de empleo y con creación de valor.

Entonces, si bien, nuevamente, acá no estamos discutiendo la necesidad o la no necesidad de repartir estos bonos, pero pretender defender este decreto de urgencia en base a falacias, creo que tampoco es algo que nosotros debamos aceptar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Tudela.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Señora presidenta, he sido aludido.

La señora PRESIDENTA.— A ver, congresista Bellido, por favor, un minuto, porque ya estamos bastante tiempo en este tema y todavía tenemos en la agenda algunos otros temas que tratar.

Le doy la palabra, congresista Bellido.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Sí, solamente, bueno, sería importante que el Estado genere riqueza, no es cierto, que los fondos que tiene el Estado salgan, salgan de la capacidad de producción, todo lo demás.

Pero, con una Constitución y por las características que tiene la Constitución de 1993, al Estado no le permite eso. Entonces, en un marco jurídico distinto, no podemos pedir o...

La señora PRESIDENTA.— No se le escucha congresista Bellido. Se ha perdido la conexión.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Aló.

La señora PRESIDENTA.— Sí, ahí recién. No lo hemos escuchado.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— A ver, mejor voy a venir presencialmente a la sala.

La señora PRESIDENTA.— Ha hablado usted de la Constitución.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— La palabra, señora presidenta.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta, uso de la palabra, un minuto.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Aragón y luego el congresista Cerrón.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Sí, señora presidenta, solamente precisar un detalle jurídico que es fundamental, se ha dicho y está en la Constitución del Estado, en el artículo 80 en el último párrafo: *Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República, tal como la Ley de Presupuesto.*

El fundamento de ese párrafo de la Constitución del Estado, está en función a que cada uno de ellos es una modificación a las decisiones aprobadas en la Ley original, llámese crédito suplementario, habilitación o transferencias de partidas, implica una modificación a la decisión que se aprobó en la Ley original.

Entonces, para modificar ello, hay que tener el mismo poder que para aprobarla, por eso, ese párrafo del artículo 80 es fundamental.

Ahora, yo insisto, en que, si bien es cierto, ya se ha ejecutado gasto público y hay gasto público por ejecutarse, sobre todo, entonces, en estos momentos al margen de todo, no vamos a pedir que devuelvan también al personal público, a los trabajadores públicos, esos bonos. Muy bien, los vamos a pedir devuelvan señores, vengan hagan su colita, devuelvan. No se trata de ello, no es cierto. Sin embargo, me parece importante que además de la exhortación que se tiene que hacer y ya es una exhortación reiterativa, al ministro de Economía y Finanzas, señor ministro, es importante también lo que manifestó la congresista Echaíz en el sentido, a ver, estamos o no estamos ante un tema de infracción constitucional.

Entonces, en el artículo único que deroga, que posiblemente derogue el decreto de urgencia 105, sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación de las transferencias de partidas contenidas con las responsabilidades, podría decirse, o no, con las responsabilidades constitucionales y administrativas pertinentes, en fin, eso es lo que también la colega Echaíz propuso pues en el debate.

Bueno, muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta. Buenos días. (8)

La señora PRESIDENTA.— Ah. ¿Cómo está, congresista Bellido?

Congresista, no se saque la mascarilla. Perdone, pero estamos todos con sumo cuidado.

Congresista Bellido y luego hay otro congresista que está... No.

¿Congresista Cerrón, también?

A ver, congresista Bellido, solamente para lo que estaba usted mencionando y luego terminamos con el congresista Cerrón; y pasamos a dar lectura al texto sustitutorio recogido y pasamos a la votación.

Congresista Bellido, tiene la palabra.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muchas gracias, presidenta.

Decía que sería interesante que el Estado genere riqueza en el país, sea parte de la producción y la productividad, pero con una Constitución con las características que tiene y con el enfoque que tiene eso no se va a dar. Entonces, considero apelar a ello. Obviamente, tenemos que estar con una Constitución distinta; y si en esa línea coincide con nosotros la congresista Adriana Tudela, bueno, iremos hacia una propuesta de una nueva Constitución. Sin embargo, en materia de debate el día de hoy es este Decreto de Urgencia 105-2021.

Lo que quería consultar, señora presidenta, si convocamos exclusivamente para el sustento y las motivaciones antes de votar del viceministro de Hacienda y el ministro de Economía, ¿genera algún perjuicio?, ¿tenemos algún apuro?, ¿podemos hacerlo extraordinariamente mañana?

Si hay algún apuro, me gustaría tenerlos acá al frente y preguntar punto por punto este tema y que nos puedan responder.

Nada más, señor presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista.

Congresista Cerrón.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Muchísimas gracias.

Como una cuestión de orden voy a dar lectura al informe que se emite por el Defensor del Pueblo, toda vez que me parece no democrático no tener esta oportunidad de amplitud.

Muchas gracias, señora presidenta, por esa deferencia.

De acuerdo a esto voy a ser breve..

La señora PRESIDENTA.— Congresista Cerrón.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Sí.

La señora PRESIDENTA.— ¿Cuántas hojas tiene el informe para, más o menos tomar el tiempo?

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Una hojita nomás, son unas tres conclusiones breves.

La señora PRESIDENTA.— Ah, perfecto.

Tiene la palabra, congresista.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Yo sí considero que también todos debemos ser democráticos en el tiempo. Gracias.

La señora PRESIDENTA.— No. Democrático somos, obviamente. O sea, no se puede de ninguna manera decir que acá se recorta ninguna libertad, ningún derecho. Lo que sí tenemos el cuidado, y se lo he expresado, es respecto a que las comunicaciones no están dirigidas a la comisión. Pero igual si usted se hace responsable yo le doy la palabra.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Correcto.

A ver, señora presidenta, así no estén dirigidas yo le pedí que lo lea. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA.— Yo le doy la palabra, congresista Cerrón. Gracias.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Gracias.

Bueno, respecto al informe dice: la consulta formulada está referida a la facultad del presidente de la República de expedir decretos de urgencia para aprobar créditos suplementarios y transferencias de partidas en la medida que el artículo 80 de la Constitución señala que los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencia de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Es decir, se requiere determinar si existe una prohibición constitucional de dictar decretos de urgencia en dicha materia.

Para arribar a una conclusión sobre la particular resulta imprescindible efectuar un ejercicio de interpretación constitucional. Como se sabe, tanto en la teoría como en la jurisprudencia constitucional han acuñado diversos principios que orientan la labor del intérprete, ello no significa dejar de lado las reglas tradicionales usadas para interpretar las leyes, los criterios gramatical histórico, sistemático e ideológico, sino que deben complementarse con las que ha desarrollado el derecho constitucional.

Conclusiones

Uno, el presidente de la República de conformidad con el artículo 118, inciso 19), de la Constitución, puede dictar decretos de urgencia en materia económica y financiera con rango de ley, siempre que exista un supuesto habilitante, la extraordinaria y urgente necesidad.

Dos, en la medida que se respete el referido presupuesto habilitante el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de urgencia en materia presupuestaria en tanto ella forme parte del régimen económico previsto por la Constitución.

No existe una prohibición expresa para hacerlo, como sí ocurre en materia tributaria y resulta coherente con un régimen presidencial como el peruano, de lo contrario se podría estar limitando la actuación del Ejecutivo en aquellos casos de extraordinaria y urgente necesidad.

Finalmente, debido al carácter y especialidad de las normas presupuestales; por ejemplo, su vigencia temporal y el hecho que autoriza en gastos que en los actuales momentos ya habrían sido realizados, la eventual derogación de un decreto de urgencia dictada en esta materia podría carecer de efectos prácticos, ello, pues, la derogación no tiene efectos retroactivos y porque un eventual gasto realizado ya sería un hecho consumado.

Por ello, resulta altamente recomendable evaluar en cada caso concreto los efectos a que podría conducir una eventual derogación de un decreto de urgencia en esta materia.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Cerrón.

Es un informe, entiendo, de Defensoría del año 2006, ¿no?, sí.

Muchas gracias.

Vamos, entonces, a solicitar que la señora secretaria técnica dé lectura al texto sustitutorio recibidos los aportes de los señores congresistas, y luego procederemos a la votación.

La SECRETARIA TÉCNICA da lectura:

Señora presidenta, conforme a sus indicaciones, la inclusión que se haría de acuerdo a las propuestas de la congresista Echaíz de Núñez y otros congresistas que también consideraron pertinente como el señor Aragón.

La parte que se incluiría estaría en la sección conclusión, me permito poder leer toda la conclusión para que quede claro dónde se ubicaría este texto añadido.

Conclusión

Por lo expuesto, la comisión recogiendo el informe aprobado por unanimidad del grupo de trabajo encargado del control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo, a

través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales...

La señora .- No se escucha.

El señor .- Presidenta, no tenemos audio.

La señora .- No se escucha nada.

La SECRETARIA TÉCNICA.- ¿Ahora sí se me escucha?

Señora presidenta, conforme a sus indicaciones, procedo a dar lectura de la conclusión del dictamen con la inclusión que se habría llegado luego de las coordinaciones y las intervenciones de algunos congresistas.

El señor .- Presidenta, la participación del congresista Cerrón no se escuchó.

La señora MOYANO DELGADO (FP).- Presidenta, yo tengo una propuesta.

La SECRETARIA TÉCNICA.- *Conclusión.*

Por lo expuesto...

La señora MOYANO DELGADO (FP).- Presidenta, tengo una propuesta de conclusión.

La SECRETARIA TÉCNICA.- *Conclusión.*

Por lo expuesto, la comisión recogiendo el informe aprobado por unanimidad por el grupo de trabajo encargado del control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo, a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales y ejecutivos ha procedido a realizar el control del Decreto de Urgencia 105-2021 que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos.

Ha concluido que este decreto de urgencia no cumple con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118, inciso 19), de la Constitución Política del Perú, así como los requisitos formales señalados en el artículo 91 del Reglamento del Congreso.

En consecuencia, se recomienda su derogación y que se exhorte al Poder Ejecutivo a dar estricto cumplimiento del tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118, inciso 19), de la Constitución Política, así como poner mayor celo en el cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión de los decretos de urgencia que emite bajo responsabilidad.

Igualmente, se acuerda enviar el presente dictamen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que pueda, de considerarlo pertinente, conforme lo señala el artículo 89 del Reglamento del Congreso, iniciar investigación sobre los actos de los ministros involucrados en la emisión del Decreto de Urgencia 105-2021, sin respetar las disposiciones constitucionales, con el fin de evaluar si existen actos de infracción a la Constitución.

El texto que se propone derogar como sigue.

Ley que deroga el Decreto de Urgencia 105-2021, decreto de urgencia que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos.

Artículo único.— Derogación del Decreto de Urgencia 105-2021, decreto de urgencia que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos.

Se deroga el decreto de urgencia 105-2021 que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos, sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación de las transferencias de partidas contenidas en la norma derogada a la fecha de la emisión de la presente ley.

Dese cuenta, sala virtual de comisiones...

El señor .— El audio no es bueno.

La señora PRESIDENTA.— Vamos a repetir la última parte, simplemente que creo que es la parte que no se ha escuchado bien, porque vamos a compartir en este instante también el texto sustitutorio para que ustedes lo puedan ver, señores congresistas.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora presidenta, la parte que se estaría incluyendo como resultado de la sesión del día de hoy, del Decreto de Urgencia 105-2021, sería el siguiente.

Igualmente, se acuerda enviar el presente dictamen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que pueda, de considerarlo pertinente, conforme lo señala el artículo 89 del Reglamento del Congreso, iniciar investigación sobre los actos de los ministros involucrados en la emisión del Decreto de Urgencia 105-2021, sin respetar las disposiciones constitucionales, con el fin de evaluar si existen actos de infracción a la Constitución.

La señora PRESIDENTA.— Muy bien.

¿Congresista Moyano, desea usted hacer uso de la palabra?

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Sí, presidenta.

Yo quería, más bien, presentar la conclusión en la parte que dice: así como poner mayor celo. En vez de colocar "así como poner mayor celo", yo propongo que diga: sin perjuicio de las responsabilidades que acarrea el haber aprobado normas sin contemplar el procedimiento constitucional.

Esa es mi propuesta. Pido que se quite "así como poner mayor celo". Porque en realidad esto ya no es una exhortación, sino más bien indicar la exhortación de esa manera.

Y si esto mismo podría incluirse dentro del texto, aunque debería ser en conclusión, sería importante.

Entonces, de esa manera ya estamos, digamos, advirtiéndolo al Ejecutivo que todo lo que está haciendo con estos decretos de

urgencia tiene consecuencias constitucionales y sanciones constitucionales.

Eso, presidenta. En ese sentido es mi propuesta.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Moyano, por favor, fuera tan amable de poner en el chat de la Comisión de Constitución los aportes que usted está realizando para poder incorporarlos.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Sí, ahorita lo pongo.

La señora PRESIDENTA.— Igualmente el congresista Aragón, me parece que él está mencionando el tema de responsabilidades civiles, penales y administrativas.

Vamos a incorporar lo mencionado y luego damos lectura para la aprobación.

A ver, mientras la secretaria técnica está elaborando el texto con los aportes de los señores congresistas, vamos a pasar a un cuarto intermedio respecto a este tema que se está tratando; y vamos para avanzar, porque tenemos una agenda pendiente sobre el siguiente dictamen que ha recaído en el Proyecto de Ley 045-2021. **(9)**

Vamos avanzado mejor, y una vez que esté listo ya podemos luego proceder a la votación.

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 045-2021, ley de reforma constitucional que crea el Consejo de Estado; y 492-2021, ley que regula el funcionamiento del Consejo de Estado.

Presento ante ustedes, señores congresistas, el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 045, presentado por el congresista Aragón, del grupo parlamentario Acción Popular; y 492-2021, presentado por el Defensor del Pueblo, por los cuales se plantea la regulación del Consejo de Estado.

El primer proyecto presentado propone su regulación a nivel constitucional, de forma tal que el Consejo de Estado sea un órgano autónomo, auxiliar, plural y pacificador, cuya finalidad sea dar solución a las crisis políticas de interés nacional, salvaguardar los derechos fundamentales de la Nación en regímenes de excepción y otras urgencias del Estado debidamente fundamentadas.

El segundo proyecto propone que la regulación del Consejo de Estado sea a nivel legal como un órgano que promueve la coordinación interinstitucional dirigido a concretizar el principio de cooperación entre los poderes públicos y los órganos constitucionales autónomos.

Habiéndose evaluado la problemática advertida en ambas propuestas respecto a la necesidad de institucionalizar la existencia o funcionamiento de ese órgano, instancia o espacio de coordinación interinstitucional en el que participan las más altas autoridades del Estado peruano, Poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos el cual ha venido contribuyendo a concretizar el principio de cooperación entre los poderes públicos para el bienestar general y que de manera informal ha sido convocado bajo

la denominación Consejo de Estado hasta en 27 oportunidades durante los últimos 17 años, así como los antecedentes constitucionales, experiencia comparada y la opinión de expertos consultados.

Esta comisión recomienda que su regulación se materialice por la vía legal, toda vez que no supera los parámetros constitucionales desarrollados por el Tribunal Constitucional para poder ser considerado como organismo constitucional autónomo.

En ese sentido, proponemos que en el texto legal se consagre, primero, la naturaleza consultiva del Consejo de Estado que promueve la coordinación interinstitucional entre las altas autoridades del Estado peruano que lo conforman y la naturaleza no vinculante de las recomendaciones vertidas y acuerdos adoptados por el Consejo de Estado con relación a las altas autoridades del Estado peruano que lo conforman, ello en atención a que deben permanecer incólumes los principios de separación de poderes y de corrección funcional referidos al respeto irrestricto que deben tener los Poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos por el reparto de competencias y funciones públicas que tanto el contribuyente como el legislador nacional han establecido.

Segundo, igualmente, teniendo en consideración los antecedentes que nos muestra que la convocatoria del Consejo de Estado ha sido realizado siempre por la máxima autoridad del Estado peruano, el presidente de la República, pero que en los últimos tiempos, como se informa en el dictamen, viene siendo requerida por otras altas autoridades públicas quienes ejercen la titularidad del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y, por supuesto, también del Congreso de la República, proponemos que la convocatoria pueda ser realizada por el presidente de la República o de ser el caso a pedido de la mitad más uno del número legal de sus miembros. Creemos que ello debe ser así, ya que se trata de un espacio de coordinación interinstitucional en el que participan las altas autoridades del Estado peruano, Poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos, lo que contribuye a concretizar el principio de cooperación entre los poderes públicos para el bienestar general y no solamente en un equipo de asesoramiento al servicio de quien ejerce la presidencia de la República.

Igualmente, planteamos en el Consejo de Estado puedan participar las altas autoridades del Estado peruano, Poderes del Estado en principio, porque creemos que la presencia de los tres Poderes del Estado supone la participación de quienes representan el ejercicio de las tres funciones estatales, el Poder Ejecutivo, Legislativo y la función Jurisdiccional.

Asimismo, consideramos que resulta necesaria la participación de los órganos constitucionales autónomos, porque su presencia supone la participación de quienes representan a las funciones sistémicas constitucionalizadas. En materia económica, Contraloría General de

la República, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. En materia jurídica, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo. Y en materia electoral, el Jurando Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Del mismo modo, haciendo nuestra la sugerencia de la Contraloría, consideramos importante la participación de un representante de los gobiernos regionales y uno de los gobiernos locales.

Finalmente, esta comisión considera pertinente que a las sesiones del Consejo de Estado puedan ser llevadas de forma presencial o virtual. Y que las recomendaciones y acuerdos que adopte el Consejo de Estado sean públicas, salvo las restricciones establecidas por ley.

Con relación a la publicidad de sus acuerdos consideramos que ello debe ser, porque es necesario garantizar los principios de publicidad y transparencia que rigen la actuación de los poderes públicos en una democracia. Asimismo, dicha publicidad les permite a los ciudadanos ejercer control sobre los actos, recomendaciones y acuerdos que se puedan adoptar en el marco del Consejo de Estado.

Por supuesto, la naturaleza pública de las mismas tendrán excepciones, las que deben ser establecidas por ley, siempre de acuerdo al principio de proporcionalidad.

Habiendo culminado la presentación del predictamen, vamos a dar inicio al debate respectivo; pero, primero, quiero saber si es que, a través de secretaría técnica, tenemos ya listo el texto del dictamen anterior para poder proceder, antes de iniciar este debate, a la votación.

Bueno, vamos a dar lectura al texto, en realidad a los aportes realizados por los señores congresistas que se van a agregar al texto que ya se les ha presentado, para proceder a votar el primer dictamen recaído en el Decreto de Urgencia 105-2021.

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase a dar lectura.

El señor .- Que se ponga en el chat, por favor.

La SECRETARIA TÉCNICA da lectura:

Señora presidenta, el cambio sería en el segundo párrafo de la conclusión y además la inclusión de un tercer párrafo. Y sería como sigue:

En consecuencia, se recomienda su derogación y que se exhorte al Poder Ejecutivo a dar estricto cumplimiento del tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118, inciso 19), de la Constitución Política, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas y constitucionales que acarrearía el haber aprobado normas sin contemplar el proceso constitucional correspondiente.

Igualmente, se acuerda enviar el presente dictamen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para conocimiento y pueda, de considerarlo pertinente, actuar conforme lo señala el artículo 89 del Reglamento del Congreso.

La señora PRESIDENTA.— Muy bien.

Con los aportes que hemos recogido en el texto y no habiendo otras intervenciones, vamos a someter a votación el predictamen de control constitucional del Decreto de Urgencia 105-2021, por el que se establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor de personal del sector privado y público.

Señora secretaria, por favor, sírvase tomar nota de los votos señores congresistas.

Previamente, en un minuto vamos a repartirles el texto a todos y cada uno de ustedes, y luego procedemos a la votación.

El señor .— Presidenta, por favor, que se considere mi asistencia, ya lo señalé por el chat. Gracias.

(Pausa). (10)

La señora PRESIDENTA.— A ver, vamos a darle el uso de la palabra a la secretaria técnica, para que lea el texto sustitutorio de la parte conclusiva del dictamen y cómo quedaría.

Señora secretaria técnica, tiene usted la palabra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora Presidenta, el nuevo texto sustitutorio que ha sido elaborado a las 11 y 57 horas del día de hoy, ha sido ya distribuido entre los congresistas a través de la plataforma del Teams, y también del chat de la comisión, y a través también de sus asesores.

Y el texto sería como sigue.

Conclusión.

Por lo expuesto, la comisión recogiendo el informe aprobado por unanimidad por el grupo de trabajo, encargado del control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia, y tratados internacionales ejecutivos, ha procedido a realizar el control del Decreto de Urgencia 105-2021, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos.

Ha concluido que este decreto de urgencia no cumple con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118 inciso 19) de la Constitución Política del Perú, así como con los requisitos formales señalados en el artículo 91 del Reglamento del Congreso.

En consecuencia, se recomienda su derogación; y que se exhorte al Poder Ejecutivo a dar estricto cumplimiento al tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118 inciso 19) de la Constitución Política, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales,

administrativas y constitucionales que acarrearía el haber aprobado normas sin contemplar el proceso constitucional correspondiente.

El texto que se propone aprobar es como sigue:

Ley que deroga el Decreto de Urgencia 105-2021, decreto de urgencia que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos.

Artículo Único. Derogación del Decreto de Urgencia 105-2021, decreto de urgencia que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos.

Se deroga el Decreto de Urgencia 105-2021, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos, sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación de las transferencias de partidas contenidas en la norma derogada a la fecha de emisión de la presente ley.

Dése cuenta, sala de virtual de comisiones.

Lima, 11 de enero de 2022.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Echaíz.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Creo que el artículo único ha omitido incorporar el tema de determinación de las responsabilidades, que está en la exposición de motivos que nos acaban de leer; debería agregarse al final "y de la determinación de las correspondientes responsabilidades".

La señora PRESIDENTA.— Congresista Echaíz, en el caso del añadido, del aporte que usted realiza a efectos de que se ponga en la fórmula legal, esto desde el punto de vista de técnica legislativa no es posible hacerlo; por eso es que está en la parte resolutive, pero no en la fórmula legal correspondiente.

Por eso es que se está incorporando lo solicitado por usted sin perjuicio de las responsabilidades, civiles, penales, administrativas y constitucionales que acarrearía el haber aprobado normas sin contemplar —y creo que acá debemos de aclarar este tema— el procedimiento y mandato establecido en la Constitución, para evitar que cuando hablamos de proceso constitucional correspondiente, pudiera interpretarse que se trata de una acción de amparo.

Entonces, quedaría de esta manera: "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas y constitucionales que acarrearía el haber aprobado normas sin contemplar el procedimiento y mandato establecido en la Constitución".

Entonces, está recogido su aporte pero no en la parte resolutive

por los temas de técnica legislativa que le menciono.

Entonces, creo que...

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— (Falla en el audio), pero con una parte considerativa, sencillamente, no resolutive.

La señora PRESIDENTA.— No, es la parte resolutive, congresista Echaíz.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— ¿Del informe?

La señora PRESIDENTA.— Pero no en la fórmula legal, pero no en la fórmula legal.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Okay, bueno.

La señora PRESIDENTA.— Sí, está en la parte resolutive, pero no en la fórmula legal.

Bueno, con las opiniones recogidas vamos a proceder a la votación.

Señora secretaria técnica, tomar nota del sentido del voto de los señores congresistas.

Les estamos remitiendo el nuevo texto, que simplemente es la corrección del último párrafo y procedemos a votar, para que todos tengan conocimiento y en su poder el texto que va a aprobar.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora Presidenta, se ha enviado el nuevo texto adecuado que corresponde a las 12 y 5 pm, a los señores congresistas a través de la plataforma Teams, también a través del chat de la comisión, y también al WhatsApp de los asesores de los congresistas miembros de la comisión.

El cambio se centra en el segundo párrafo de la parte conclusiva del dictamen, que señala lo siguiente: En consecuencia, se recomienda su derogación; y que se exhorte al Poder Ejecutivo a dar estricto cumplimiento del tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118 inciso 19) de la Constitución Política, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas y constitucionales que acarrearía el haber aprobado normas sin contemplar el procedimiento y mandato establecido en la Constitución.

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, vamos a comenzar la votación, señora secretaria técnica.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Juárez Gallegos.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Echaíz de Núñez.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Tudela Gutiérrez.

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Aguinaga Recuenco.

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Bellido Ugarte.

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— En contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Caverro Alva.

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Caverro, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Cerrón Rojas, en contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Cutipa Ccama, en contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Elías Ávalos.

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Jeri Oré (); congresista Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Quito Sarmiento.

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— En contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Reymundo Mercado.

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— En contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.
Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Señora Presidenta, debo informar que el señor Ventura Angel ha presentado licencia, y se encuentra en su reemplazo el señor congresista Castillo Rivas.

Congresista Castillo Rivas, en reemplazo del congresista Ventura Ángel.

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— A favor, Castillo Rivas.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Jeri Oré (); congresista Salhuana Cavides.

Señora Presidenta, han votado 16...

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Secretaria técnica, en reemplazo del congresista Balcázar.

La SECRETARIA TÉCNICA.— El congresista Balcázar ha presentado licencia. Me dice que el señor Paredes está en su reemplazo.

La señora PRESIDENTA.— Perfecto, congresista Paredes.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Paredes, por favor, el sentido de su voto.

El señor PAREDES GONZALES (PL).— En contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Señora Presidenta, con el voto del congresista Paredes Gonzáles, en reemplazo del congresista Balcázar Zelada, han votado 17 señores congresistas, de los cuales 11 señores congresistas han votado a favor, y seis señores congresistas han votado en contra; en consecuencia, el dictamen de control constitucional del Decreto de Urgencia 105-2021 ha sido aprobado por mayoría.

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. Muchas gracias.

El dictamen de control sobre el Decreto de Urgencia 105 ha sido aprobado por mayoría.

Estábamos en el siguiente punto de Orden del Día, y estábamos por iniciar el debate respecto al Proyecto de Ley 045 y Proyecto de Ley 492, que proponen la creación del Consejo de Estado.

Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, puede **(11)** solicitarlo a través de la plataforma o de manera presencial.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta, solicito el uso de la palabra, por favor.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Aragón.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias, Presidenta.

En primer lugar, señora Presidenta, señores congresistas; quiero expresar mi más sincero reconocimiento a la labor que viene desempeñando la presidencia de la Comisión de Constitución, a toda la mesa directiva de la comisión, a todo su personal técnico

profesional.

En ese sentido, señora Presidenta, agradezco el esfuerzo de la comisión para la elaboración del presente dictamen que regula, efectivamente, el funcionamiento del Consejo de Estado, y que recoge el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo y por mi bancada, y cuya nueva fórmula legal ha superado las observaciones que hicieron los miembros del Consejo Consultivo y los congresistas que están aquí presentes en sesiones anteriores. Con esta propuesta mejorada se está fortaleciendo creo yo nuestro régimen democrático, el sistema de gobierno presidencial, la gobernabilidad del país que es tan importante, y, de igual forma el goce de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Debemos entender, señora Presidenta; colegas congresistas, que la esencia de esta propuesta legislativa es la colaboración que tienen que existir entre los poderes del Estado frente a las diversas emergencias de interés público que puedan poner en riesgo a la nación; sabemos que podemos señalar dentro de estas los estados de emergencia, las crisis políticas, la falta de gobernabilidad, entre otras, que en resumen afectan y amenazan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se puede dar en cualquier momento, al margen de quien esté como presidente o no esté como Presidente de la República, esto de manera general; para lo cual, indudablemente es necesario la regulación del Consejo de Estado. Este es un órgano consultivo del más alto nivel que reúne a las más altas autoridades del Estado. Es absolutamente constitucional porque se centra en el principio de colaboración de poderes, que está reconocido en la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Por supuesto que respetamos el principio de separación de poderes, no se está vulnerando el principio de separación de poderes, de ninguna manera, pero también existe el principio de colaboración de los poderes del Estado; y esto lo ha señalado el mismo Tribunal Constitucional, cuando nos dice que las relaciones entre los diferentes poderes contienen mecanismos de control y de colaboración, está en el caso de disolución del Congreso en fundamento 31 del TC.

Entonces, esta propuesta no afecta la separación de poderes, sino lo que busca es la colaboración, señora Presidenta, colegas, entre los poderes del Estado.

No se entienda que este Consejo de Estado está por encima del Poder Judicial o por encima del Poder Ejecutivo, Legislativo, que va a orientar, va a determinar que el Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Congreso o el Presidente de la República, van estar imperativamente obligados a decisiones vinculantes de Consejo de Estado, creo que eso ya se ha aclarado en su momento del debate, entonces eso de ninguna manera. Pero acá de lo que se trata de todas maneras, es que exista esa colaboración entre los poderes del Estado, existe ya el proyecto de ley presentado también por la Defensoría del Pueblo en ese sentido.

Entonces, para concluir, señora Presidenta, yo quiero en este momento, exhortar a los miembros de la comisión a que se pueda aprobar este predictamen que regula el Consejo de Estado, toda vez que (...?) fortalecerá la gobernabilidad del país que se ha visto afectada en muchos momentos de la historia.

Y actualmente el Consejo de Estado funciona, o sea, ha estado funcionando con cierta regularidad, ha sido convocado en algún momento por los diferentes jefes de Estado, el señor Kuczynski, el señor Castillo, el señor García, el señor Humala, sólo que le falta la base legal, pero esa base legal, esa base jurídica, esa base constitucional que es tan importante en estos momentos.

Muchas gracias, señora Presidenta; colegas congresistas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Aragón.

Tiene la palabra la congresista Moyano.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, Presidenta.

Presidenta, primero como manera de reflexión.

Cómo vamos a regular algo que no existe formalmente. Ese Consejo de Estado ha sido convocado de manera fortuita, en algún momento por voluntad de un Presidente de la República y le ha llamado Consejo de Estado, pero no existe, no lo podemos regular por tanto.

Por otro lado, señora Presidenta, para mi este dictamen estaría vulnerando lo que es la separación de poderes, el principio de separación de poderes, la capacidad de tomar decisiones; y peor aún cuando se dice que habría en el artículo 4 cuando habla o cuando haya ocurrido un hecho de mayor relevancia, eso a nadie le impide que el Presidente de la República cuando haya un problema de seguridad nacional que venga de fuera, por supuesto convocar. Pero, ¿cómo es que se interpreta así la gobernabilidad o la estabilidad democrática, es decir, no me vaques o no me cierres el Congreso? O sea, cómo interpretamos eso, en qué momento.

Y por otro lado, Presidenta, también dice que el Consejo está constituido por el Presidente de la República, el Presidente del Congreso, el Presidente del Poder Judicial, los titulares de organismos autónomos constitucionalmente, y el Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y el Presidente de la Asamblea de Municipalidades del Perú.

Estos dos últimos, señora Presidenta, no son organismos constituidos, no son organizaciones formales, son privadas.

La AMPE, Presidenta, no sé si es el AMPE, es una asociación nacional, obviamente, que los alcaldes tienen la decisión de ser parte de esa asociación o no. Por lo tanto, el que preside la AMPE no representa a los más de mil ochocientos distritos en el país. No es una organización constitucional, no está formalmente constituida, entonces, Presidenta, estaríamos cometiendo un craso error si colocamos igual manera la Asamblea Nacional de Gobiernos

Nacionales.

Y por otro lado, Presidenta, por ejemplo, el Presidente de la República sí representa al Ejecutivo, a los ministros, puede tomar decisiones sobre sus actos ejecutivos, lo que no puede hacer un Presidente del Congreso. A quién representaría en el Consejo de Estado, ¿al Congreso? Cuando tome decisiones sobre quiénes va a tomar decisiones, cómo va ser ese acuerdo de decisiones que va a tomar el Presidente del Congreso en el Consejo.

Lo pongo como ejemplo, Presidenta, para que sigamos reflexionando en función a esto, Presidenta. Uno, no se regula lo que no existe, y dos, no podemos incluir organismos que no están formalmente constituidos, formados de manera en el Estado, la AMPE no existe como una organización; es como, Presidenta, cuando todo el mundo habla de teniente alcalde, no existe teniente alcalde, es el primer regidor de la lista, no existe teniente alcalde. Por lo tanto, no está obligado este a tener regidor siempre a suplir al alcalde, por eso es que dicen que el alcalde puede dejar a cualquier regidor en su representación, incluso enviarlo en su representación cuando le sea necesario.

Presidenta, yo no estoy de acuerdo con ese dictamen, voy a votar por supuesto en contra porque además vulnera, como dije ya, el principio de separación de poderes y el equilibrio que se requiere para poder gobernar.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Moyano.

Tiene la palabra la congresista Echaíz.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias, Presidenta.

Bueno, yo quiero recordar que de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, el gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes, así se dice, pero es separación de funciones del poder.

El Título IV de la Constitución, establece todas y cada una de las funciones que le corresponde a los diferentes organismos del poder o instituciones, llámese, bueno, Poder Legislativo, Ejecutivo, y al sistema de administración de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás organismos constitucionalmente autónomos.

Ya el Tribunal Constitucional ha dicho de que el artículo 43 constituye el núcleo duro de la Constitución y no puede ser reformado por una nueva norma, no puede ser cambiado a través de una reforma o incorporación de normas incluso del mismo rango constitucional porque sería vaciar de contenido el mismo artículo; y poner las funciones, un poco someter las funciones o las decisiones o responsabilidades de quienes tienen a cargo el ejercicio de estas funciones, a un consejo que finalmente sería de carácter consultivo.

Yo tengo mis reparos y siempre los he tenido en relación de

incorporar, incluso si fuera viable, incorporar al Poder Judicial y al Ministerio Público como parte de esta institución, de este organismo e incluso el Tribunal Constitucional; y tan en la práctica se dio que los miembros del Tribunal Constitucional no participaron de estas reuniones porque sabían que eso era incompatible con su función; lo hicieron al Poder Judicial y al Ministerio Público en los consejos que se han venido dando de hecho, y eso ha afectado, como todos sabemos, credibilidad e independencia funcional porque se ha puesto en tela de juicio la misma en cuanto ha tenido que intervenir en hechos que alcanzaban de alguna manera a quienes son miembros de esa comisión.

Creo que el principio básico y elemental de la administración de justicia que es la independencia en el ejercicio de la función, y la autonomía económica, administrativa funcional de cada una de estas instituciones tiene una razón de ser; y es que está de por medio el tema del control del poder, de evitar los excesos políticos, en sus manos recae la responsabilidad de mantener el equilibrio, de hacer viable y posible la justicia y no poner sombra sobre aquello que debe permanecer inmaculado para garantía y para confianza de todos los ciudadanos.

Yo no estoy de acuerdo con este proyecto, indudablemente votaré en contra; y más bien recomendaría de que se llame la atención de la presencia de estas instituciones en el actual Consejo de Estado que viene funcionando a iniciativa creo del Ejecutivo; y que además se tome nota de que los acuerdos que puedan adoptarse ahí, qué incidencia tienen o qué tipo de efectos generan en la responsabilidad de quienes son miembros titulares de las instituciones.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público tienen por función realizar acto de gestión pública, eso corresponde al Ejecutivo, como lo no tiene el Congreso de la República porque su función es dar leyes.

Si bien es cierto la separación de poderes no es absoluta y debe ser entendida en claro equilibrio de controles recíprocos, de pesos y contra pesos e incluso sobre la base de las relaciones de coordinación y cooperación, todo instrumento que colabore en una separación más clara de la justicia respecto a la política, indudablemente favorece el respeto, la confianza y legitima la decisiones de estas instituciones, y van a redundar indudablemente en una valoración más positiva de los ciudadanos respecto tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público y del propio Tribunal Constitucional.

Creo que es necesario, útil e indispensable que meditemos bien sobre este tema. Si queremos fortalecer el estado de derecho, hagámoslo de una manera serena, pensada, equilibrada y analítica, y veamos dónde están los aspectos disfuncionales en nuestras instituciones, y de qué manera estamos contribuyendo a solucionarlo o de pronto a ahondarlos. **(12)**

Hay que trabajar los temas pensando en la realidad, en lo que tenemos, hacia dónde vamos y en qué manera estamos contribuyendo a solucionarlo o de pronto a *asentarlos.

Yo, señora presidenta, en este caso, desde ya le digo que mi voto será en contra.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Echaíz.

¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra?

El señor SOTO PALACIOS (AP).— El congresista Soto, por favor.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Soto, tiene el uso de la palabra.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Muchas gracias, señora presidenta; de la misma forma saludo a todos los congresistas.

Bueno, señora presidenta, el Proyecto de Ley N 045, de mi colega Luis Ángel Aragón, el de mi partido; y también del Proyecto de Ley N 492, presentado por el señor defensor del pueblo, del señor Walter Gutiérrez Camacho, Ley que regula el Consejo de Estado.

Bueno, he visto las opiniones que han ingresado a la comisión, de algunos expertos.

Entre ellos también está el constitucionalista doctor Natale Amprimo Pla, en el cual él manifiesta: Vulnera el principio de separación de poderes y la autonomía en las competencias de órganos constitucionales; también señala que vulnera, manifiestamente, los límites materiales de una reforma constitucional al quebrantar gravemente la separación de poderes, prevista como principio del Estado Constitucional.

También, de la misma forma, del doctor Enrique Gherzi también manifiesta: La separación de poderes garantiza que los poderes del Estado y las demás entidades constitucionales autónomas lleven a cabo sus funciones con independencia. Él dice: El proyecto pone en riesgo ese principio porque permite, al menos potencialmente, que una mayoría de los integrantes del Consejo de Estado obstaculicen la labor de sus pares a través de decisiones vinculantes. También, por otro lado, señala: debe considerarse que el Consejo de Estado no *imita acuerdos de carácter vinculante que puedan causar conflictos de interés, y evaluarse que el presidente del Tribunal Constitucional no integre, tampoco el contralor general de la República, ni el defensor del pueblo y tampoco el Ministerio Público, ni ninguna otra institución que no sean los tres poderes del Estado; en este caso, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

También señala el doctor Ántero Flores-Aráoz: Los poderes del Estado son autónomos, por lo cual los presidentes no pueden comprometer a sus instituciones más allá de las atribuciones y funciones.

Señora presidenta, yo quisiera también, como conclusión, manifestarle: El Consejo de Estado debe estar conformado solo por los presidentes de los tres poderes del Estado, como vuelvo a reiterar, el Presidente del Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y las reuniones deben ser de naturaleza consultiva y de cooperación, pero en ningún caso se puede tomar decisiones vinculantes.

Finalmente, se debe de retirar a los demás integrantes señalados en el artículo 3 del presente predictamen, como son los órganos constitucionalmente autónomos, al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el presidente de la Asamblea Nacional de Municipalidades del Perú (Ampe).

También se debe dejar claro que los demás artículos, que los integrantes solo son los presidentes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Finalmente, yo votaré a favor de la aprobación del predictamen con las correcciones indicadas.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Soto.

A ver, vamos a recoger las diversas opiniones de los señores congresistas y vamos a dejarlo para un siguiente debate, una siguiente sesión de Comisión de Constitución, en donde...

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta, treinta segundo no más, por favor, sobre el tema.

La señora PRESIDENTA.— ¿Congresista Aragón?

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Sí.

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra, congresista.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias.

Solamente un tema quiero precisar a la congresista Moyano con todo afecto y aprecio.

Cuando se dicta una ley —y usted tiene experiencia, congresista Moyano—, usted ha manifestado: ¿Cómo vamos a dar una ley por algo que no existe? —Algo así entendí—.

Una ley —según mi criterio, puedo estar equivocado— o un proyecto de ley se da para regular hechos existentes dentro de la comunidad o del convivio social; sí, correcto, para regular el orden social existente —es mi criterio—. Pero también un proyecto de ley se da para crear aspectos que no están, todavía o a la fecha, regulados por el ordenamiento jurídico. Por eso, por eso es pues un proyecto de ley, crear, dar inicio, dar origen. Correcto. Pero también, por supuesto, para regular y mejorar la situación social existente en una sociedad.

Entonces, el Consejo de Estado ha estado funcionando, pero este consejo ha estado funcionando por la vía de los hechos, sin una base legal, sin una base jurídica. Entonces, con esa lógica, por

la vía de los hechos, ¿tendríamos que estar funcionando como sociedad? No, pues.

Creo que... Claro, la discrepancia es... Bueno, yo respeto la posición que..., respeto su posición; pero, obviamente, con el aporte de los especialistas, probablemente entrará, digamos, a opiniones de juristas, en fin; pero de lo que se trata es que ese consejo de ninguna manera sea vinculante u obligatorio por encima de los poderes del Estado, que no sea un poder supranacional, eso no es el objetivo; de reemplazar, de ninguna manera.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón, muchas gracias.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Por alusión, presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Congresista Moyano.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Sí, presidenta.

Efectivamente, la ley nace, dicen algunos, de la calle, señora presidenta; y hay leyes que son mandatorias, por supuesto, y hay leyes de creación, leyes que regulan el aspecto político, social, civil, penal, etcétera.

Pero cuando vamos a crear un organismo tiene que decir: "crease el organismo", que precisamente es el proyecto de ley del mismo congresista Aragón. El congresista Aragón presenta un proyecto de ley que dice que se cree el Consejo de Estado, se crea el Consejo de Estado; pero el dictamen dice: "regula el funcionamiento". ¿Cuál? El Consejo de Estado formalmente no existe.

Y entonces, si se quiere aprobar el Consejo de Estado, primero tienen que crearlo por ley en un artículo y que diga: "crease el Consejo de Estado..." y luego empieza el resto de los artículos.

Ahí me quedo, presidenta, porque sé que usted ha dejado abierto el debate.

Gracias.

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Moyano, vamos, efectivamente, a dejar abierto el debate para seguir recibiendo las opiniones de los especialistas y poder, digamos, mejorar, de todas maneras siempre, la posibilidad de redacción.

Vamos a pasar al siguiente tema.

Señores congresistas, tenemos los predictámenes de control constitucional y son sobre los Decreto de Urgencia N 002-2019, por el que se aprueba medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso.

El Decreto de Urgencia N 003-2019, incentivos para el fomento de la lectura y el libro.

Decreto de Urgencia N 004-2019, medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través del gasto público.

Decreto de Urgencia N 006-2019, por el que se regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncode) en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas.

Y el Decreto de Urgencia N 007-2019, por el que se declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad.

Presentamos estos cinco predictámenes de control, de decretos de urgencia emitidos en el interregno parlamentario 002, 003, 004, 006, 007; que fueron dictaminados en el período parlamentario anterior, pero que por disposición del Consejo Directivo, a través del Acuerdo 054-2021-2022, deben ser nuevamente sometidos a evaluación y pronunciamiento de esta comisión.

En ese sentido, los predictámenes que presento se recogen los antecedentes y estudios realizados por el anterior Congreso y se presenta similar conclusión en el sentido de que si bien todos estos decretos de urgencia, del interregno, cumplen con los parámetros normativos sustanciales desarrollados por la Comisión de Constitución del período anterior.

Se recomienda en los casos de los predictámenes de los Decretos de Urgencia 003 y 007, del 2019, exhortar al Poder Ejecutivo a cumplir con la dación en cuenta de la emisión de estas normas dentro del plazo establecido en el artículo 91 del Reglamento del Congreso, que es de 24 horas de publicada la norma; toda vez que en estos dos casos el Poder Ejecutivo dio cuenta fuera de dicho plazo.

Bueno, habiendo culminado la presentación de estos predictámenes de control constitucional, de los Decretos de Urgencia N 002, 003, 004, 006, 007, del 2019; si no hubiera intervención de algún congresista, planteo por economía procesal, y considerando que se tratan de normas de la misma naturaleza y rango, puedan ser sometidas en una sola votación.

Señora secretaria, por favor, sírvase tomar nota del sentido de votación de los señores congresistas; de no haber ninguna intervención, por supuesto.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal:

Congresista Juárez Gallegos.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Echaíz de Núñez.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Tudela Gutiérrez.

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Aguinaga Recuenco(); congresista Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Bellido Ugarte(); congresista Caverro Alva.

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Caverro, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Cutipa Ccama, en abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Elías Ávalos(); congresista Jeri Oré(); congresista Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Muñante Barrios.

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— Elías, a favor. Elías, a favor, disculpe, el sistema. Elías, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Elías.

Congresista Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Quito Sarmiento.

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— En abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Reymundo Mercado.

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Salhuana Cavides.

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Castillo Rivas, en reemplazo del congresista Ventura Angel().

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Guido Bellido, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Bellido Ugarte.

Congresista Castillo Rivas(); congresista Paredes Gonzales, en reemplazo del congresista Balcázar Zelada.

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— En abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.

Congresista Aguinaga Recuenco(); congresista Jeri Oré(); congresista Castillo Rivas().

(Silencio) (13)

Presidenta, han votado 16 señores congresistas, de los cuales 12 señores congresistas han votado a favor y cuatro señores congresistas han votado en abstención.

En consecuencia, los decretos de urgencia, del interregno parlamentario, 002, 003, 004, 006 y 007-2019; han sido aprobados por mayoría.

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias.

Vamos a someter a votación la dispensa de trámite de lectura de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos.

Si algún congresista no estuviera de acuerdo, sírvase expresarlo; sino damos por aprobada el acta con los congresistas que se encuentran presentes.

(Silencio)

Bien, no habiendo ninguna oposición; damos por aprobada la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para que entren en inmediata ejecución los acuerdos adoptados.

Y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las doce y cuarenta y tres, damos por concluida la sesión agradeciendo su participación, sus aportes, sus comentarios y su presenta a todos los señores congresistas.

Muy amables, gracias.

—A las 12:43 h, se levanta la sesión.